



Junta Nacional
de Justicia



Firma Digital

Firmado digitalmente por NEPO
LINARES DE UCEDA Marielka FAU
20194484355 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.03.2023 15:05:08 -05:00

San Isidro, 02 de Marzo del 2023

OFICIO N° 001049-2023-DPD/JNJ

Señora

MARIBEL MAGUIÑA MESTA

**Directora de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**

Calle Scipión Llona N° 350 – Miraflores

mmaguina@minjus.gob.pe

Presente.-

P.D. N.° 149-2020-JNJ

Asunto : Se remite información de abogado sancionado por mala
Práctica Profesional.

Tengo el honor de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N.° 1265, que crea el Registro Nacional de abogados Sancionados N.° 002-2017-JUS.

Asimismo, como responsable de remitir la información al "Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala Práctica Profesional", le envío, a folios 41, copia certificada de la Resolución N.° 039-2022-PLENO-JNJ, que resolvió imponer la sanción de destitución al abogado Edgar Jesús Chuquillanqui Huaranga y, a folios 30, la Resolución N.° 013-2023-PLENO-JNJ, que resolvió declarar infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto contra la indicada resolución.

Se adjunta, anexo en fojas 01, el cuadro que contiene la descripción de los datos personales del referido abogado, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Junta Nacional
de Justicia

P.D. N.° 149-2020-JNJ

Ex Magistrado	DNI	Colegio de Abogados	Colegiatura	Cargo	Res. Destitución	Res. de Reconsideración
Edgar Jesús Chuquillanqui Huaranga	██████████	Colegio de Abogados de Lima	I.C.A.L. N.° ██████████	Juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior de Justicia de Junín	Resolución N.° 039-2022-PLENO-JNJ de 30 de marzo de 2022	Resolución N.° 013-2023-PLENO-JNJ de 09 de febrero de 2023



Junta Nacional de Justicia

Resolución N.º 013-2023-PLENO-JNJ

P.D. N.º 149-2020-JNJ

San Isidro, 9 de febrero de 2023

VISTO;

El recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N.º 039-2022-PLENO-JNJ en el Procedimiento Disciplinario N.º 149-2020-JNJ, que impuso la sanción de destitución al abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por su actuación como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín; y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos materia de imputación se originan en diversas resoluciones dictadas por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora en adición de sus funciones de Satipo, colegiado que, en el trámite de los procesos penales correspondientes a los expedientes N.º 055-2015, N.º 440-2015 y N.º 441-2015 detectó que el juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, habría incurrido en presuntas conductas disfuncionales, las que fueron comunicadas a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Junín.

2. Las resoluciones dictadas por la citada Sala motivaron diversas comunicaciones a la ODECMA – Junín, siendo estas las siguientes:

- Oficio N.º 2579-2016 (Exp. N.º 441-2015)-SPAS-CSJJU/PJ¹, del 08 de junio de 2016.
- Oficio N.º 2539-2016 (Exp. N.º 055-2012) SPAS-CSJJU/PJ², del 02 de junio de 2016.
- Oficio N.º 2953-2016 (Exp. N.º 440-2015) SPAS-CSJJU/PJ³, del 10 de junio de 2016.
- Oficio N.º 5958-2016-(440-2015)-SPAS-CSJJU/PJ⁴, del 28 de diciembre de 2016.

¹ Fojas 1130.

² Fojas 1291.

³ Fojas 2004.

⁴ Fojas 2132.



Junta Nacional de Justicia

- Oficio N.° 7116-SPAS-CSJJU-PJ (441-2015)⁵, del 28 de diciembre de 2016.
- Oficio N.° 5956-2016-(440-2015)-SPAS-CSJJU/PJ⁶, del 28 de diciembre de 2016.

3. Como consecuencia de las citadas comunicaciones, por Resolución N.° Dos, de 10 de marzo de 2017⁷, la ODECMA-JUNÍN dispuso el inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por su actuación como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, expediente signado como Investigación N.° 563-2016, acumulada con las investigaciones N.° 566-2016, N.° 690-2016 y N.° 030-2017.
4. Posteriormente, por Resolución N.° Nueve⁸, de 20 de diciembre de 2017, se dispuso también la acumulación de la investigación N.° 480-2017.
5. El procedimiento fue tramitado conforme a su naturaleza, a cuyo término la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura dictó la Resolución N.° 23⁹, de 10 de febrero de 2020, estableciendo dos supuestos de hecho imputables al juez investigado que ameritarían responsabilidad disciplinaria, susceptibles de la imposición de sanción de destitución, siendo éstos los siguientes:

§ Incumplimiento de deberes judiciales en el extremo de impartir justicia con respeto al debido proceso.

- a) Expediente N.° 441-2015, proceso penal seguido contra [REDACTED] y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado.

- Por escrito presentado el 09 de noviembre de 2015 los imputados [REDACTED] y [REDACTED] ofrecieron como medios probatorios de descargo las declaraciones testimoniales de [REDACTED] y [REDACTED], advirtiéndose que las diligencias se llevaron a cabo el 16 de noviembre de 2015 a las 11:00 y 11:30 horas, respectivamente; no obstante, el Ministerio Público fue notificado el mismo 16 de noviembre de 2015 a las 12.45 horas, es decir, después de recibidas las declaraciones testimoniales.
- Mediante escrito presentado el 16 de noviembre de 2015 los imputados [REDACTED] y [REDACTED]

⁵ Fojas 2137.

⁶ Fojas 2148.

⁷ Fojas 2354 - 2370

⁸ Fojas 3002 - 3004

⁹ Fojas 3553 a 3567



Junta Nacional de Justicia

ofrecieron como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED], verificándose que la diligencia se realizó el 26 de noviembre de 2015; no obstante, el Ministerio Público fue notificado el 27 de noviembre de 2015, es decir, al día siguiente de recibida la declaración testimonial.

- A través del escrito presentado el 05 de enero de 2016 el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo las declaraciones testimoniales de [REDACTED] y [REDACTED]; tales diligencias se efectuaron el 08 de enero de 2016, a las 14:00 y 14:30 horas, respectivamente; sin embargo, no obra en autos el cargo de notificación correspondiente al representante del Ministerio Público.

b) Expediente N.º 440-2015, proceso penal seguido contra [REDACTED] y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado.

- Por escrito presentado el 11 de agosto de 2015 el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo las declaraciones testimoniales de [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], observándose que las diligencias se realizaron, en el primer caso, el 24 de agosto de 2015; y, en los dos últimos casos, el 31 de agosto de 2015. Si bien el Ministerio Público fue notificado el 18 de agosto de 2015, no se dejó constancia en actas de la presencia de su representante en dichas diligencias.
- Mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2015 el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED], diligencia que se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2015. Si bien el Ministerio Público fue notificado el 18 de septiembre de 2015, no se dejó constancia en actas de la presencia de su representante en la citada diligencia.
- A través del escrito presentado el 21 de septiembre de 2015 el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED], apreciándose que la diligencia se realizó el 02 de octubre de 2015; sin embargo, el Ministerio Público fue notificado el 12 de octubre de 2015, es decir, después de la mencionada testimonial.



Junta Nacional de Justicia

- Por escrito presentado el 24 de septiembre de 2015 el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED], observándose que la diligencia se produjo el 12 de octubre de 2015, a las 14:00 horas; sin embargo, el Ministerio Público fue notificado el mismo 12 de octubre de 2015 a las 15:51 horas; es decir, después de la citada testimonial.
- Mediante escrito presentado el 11 de diciembre de 2015 la imputada [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED], advirtiéndose que la diligencia se llevó a cabo el 20 de enero de 2016; sin embargo, no obra en autos la constancia de notificación al Ministerio Público.

- c) En ninguno de los casos anteriormente citados se dejó constancia en actas de la presencia del representante del Ministerio Público.

§ *Vulneración al debido proceso en su expresión de motivación de las resoluciones.*

- d) Los hechos vinculados a la imputación de vulneración al deber de motivación se relacionan con la expedición de la Resolución N.º 02, de 12 de abril de 2016, dictada en el trámite del expediente N.º 440-2015, por el que se declaró "fundada" la excepción de naturaleza de acción planteada por el imputado [REDACTED].
- e) En síntesis, el cuestionamiento central en este aspecto radica en el hecho que el juez investigado emitió un pronunciamiento de fondo respecto a la presunta responsabilidad o no del solicitante en la comisión del delito imputado, lo que no es materia de determinación y pronunciamiento en un incidente de excepción de naturaleza de acción; habiéndolo hecho sin exponer fundamentos concretos y objetivos que expliquen las razones del por qué la conducta atribuida al solicitante no se encuadraba dentro del supuesto descrito por los artículos 296 y 297 numeral 7) del Código Penal.

6. Por oficio N.º 000164-2020-P-PJ, recibido el 16 de septiembre de 2020, el presidente del Poder Judicial remitió la Investigación Definitiva N.º 563-2016-Junín, que contiene la Resolución N.º 23 –de fs. 3553 a 3567–, que sustenta la propuesta de destitución del abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por su actuación como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior de Justicia de Junín; cuyos antecedentes con todo el acervo documentario y medios probatorios actuados en dicho expediente se han tenido a la vista para los fines de la presente resolución.



Junta Nacional de Justicia

7. Acorde con el artículo 75 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia - JNJ, por Resolución N.º 048-2021-JNJ, de 28 de enero de 2021¹⁰, la Junta Nacional de Justicia abrió procedimiento disciplinario abreviado al abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga por su actuación como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, imputándole los cargos siguientes:

- a) *Haber recabado declaraciones testimoniales en los expedientes de los procesos penales N.º 441-2015 y N.º 440-2015 sin notificar debidamente a los testigos y al representante del Ministerio Público, lo cual originó que dichas diligencias se llevaran a cabo sin la presencia del representante del Ministerio Público.*

Con la conducta atribuida el magistrado habría presuntamente inobservado el deber previsto en el artículo 34 numeral 1)¹¹ de la Ley de Carrera Judicial – Ley N.º 29277, concordante con el principio de la función jurisdiccional preceptuado en el artículo 139 inciso 3¹² de la Constitución Política; incurriendo en la comisión de la falta muy grave tipificada en el artículo 48 numeral 13)¹³ de la invocada Ley de Carrera Judicial.

- b) *Haber vulnerado el deber de observar el debido proceso en su expresión de la motivación de las resoluciones, al emitir la Resolución N.º 02 de fecha 12 de abril de 2016, en el expediente N.º 440-2015-70, que amparó una excepción de naturaleza de acción.*

Con la conducta imputada al magistrado habría presuntamente inobservado el deber previsto en el artículo 34 numeral 1) de la Ley de Carrera Judicial – Ley N.º 29277, concordante con el principio de la función jurisdiccional preceptuado en el artículo 139 inciso 5¹⁴ de la Constitución Política; incurriendo en la comisión de la falta muy grave tipificada en el artículo 48 numeral 13) de la invocada Ley de Carrera Judicial.

8. Mediante Resolución N.º 039-2022-PLENO-JNJ del 30 de marzo de 2022, obrante de fojas 4055 a 4075, se dispuso:

¹⁰ Fojas 3730 a 3731.

¹¹ **Artículo 34.- Deberes:**

Son deberes de los jueces:

1. Impartir justicia con [...] respeto al debido proceso;

¹² **Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:**

[...]

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

¹³ **Artículo 48.- Faltas muy graves:**

Son faltas muy graves:

[...]

13. No motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales.

¹⁴ **Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:**

[...]

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.



Junta Nacional de Justicia

“Artículo primero. Declarar **IMPROCEDENTE** la caducidad formulada por el investigado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga sobre la medida cautelar de suspensión preventiva del cargo dictada en su contra por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo segundo. Declarar que **CARECE DE OBJETO** emitir pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación del informe final de instrucción, por haberse dado cuenta de la actuación solicitada por el juez investigado, conforme a los términos de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo tercero. Declarar **IMPROCEDENTE** la excepción de improcedencia de acción, con relación al cargo b), deducida por el investigado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo cuarto. Tener por **CONCLUIDO** el presente procedimiento disciplinario abreviado, aceptar el pedido de destitución formulado por el Presidente del Poder Judicial y, en consecuencia, **imponer la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN** al abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por su actuación como Juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
(...)”.

II. DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N.º 039-2022-PLENO-JNJ

9. Dentro del plazo legal, el investigado formuló recurso de reconsideración¹⁵ contra la precitada resolución, solicitando que, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se reforme la decisión apelada y se disponga la remisión de los actuados a la OCMA para la imposición de una sanción menor, alegando esencialmente lo siguiente:

Argumento 1

Respecto del cargo A), pidió que se considere que la asistencia obligatoria de los señores fiscales a las diligencias judiciales de declaración de testigos no se cumple ni se ha cumplido en ningún juzgado de instrucción porque solo se ha venido supliendo consignando en las actas testimoniales la supuesta concurrencia del señor fiscal, para que luego sean firmadas por éste, lo que constituye una práctica cotidiana a nivel nacional.

¹⁵ Por escrito de obra de fs. 4083 a 4093, y anexos



Junta Nacional de Justicia

Argumento 2

Respecto del cargo B), solicitó que se revisen los criterios ilegales e irregulares de los miembros de la Sala de Apelaciones de Satipo que declararon nula la resolución materia del indicado cargo, especialmente los contenidos en diversas decisiones supuestamente irregulares emitidas por el juez superior provisional [REDACTED] integrante de dicha sala. Agregó que el citado juez superior, para anular su decisión cuestionada, ha citado una jurisprudencia dictada con posterioridad a la decisión anulada.

Argumento 3

Sostuvo que la sanción que se le ha impuesto cuestiona su criterio jurisdiccional, que no está revestido de conductas antiéticas ni constituye actos de corrupción, lo que contraviene los principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo considerarse la opinión inicial de los órganos de control disciplinarios al evaluar las faltas imputadas.

Argumento 4

Pidió el reexamen de la proporcionalidad considerando que se encuentra en el segundo nivel de la magistratura, donde hay mayor riesgo de error y que es un juez mixto que asumió el cargo de juez del juzgado penal liquidador por motivo de la entrada en vigencia del NCPP.

Argumento 5

Indicó que no se ha producido perturbación al servicio judicial, de los justiciables ni abogados; no hubo dilación ni trascendencia pública negativa, pues los pobladores de Satipo saben que pueden verse involucrados en delitos de TID al hacer parar un vehículo para trasladarse por falta de transporte.

Argumento 6

Refirió que considera que se le está sancionando con destitución por el hecho de haber declarado fundada la excepción en un proceso de TID, pero que eso deriva de un prejuicio, puesto que él administra justicia respetando el principio de igualdad, sin discriminar a ningún procesado por la naturaleza del delito imputado.



Junta Nacional de Justicia

Argumento 7

Sobre la trascendencia social pidió considerar que ésta no se ha producido, pues no hay publicaciones periodísticas ni hubo cobertura radial ni televisiva a su decisión cuestionada; y, pidió considerar, en contrapartida, los reconocimientos que ha recibido por el buen desempeño de su labor jurisdiccional, los que obran en autos.

Argumento 8

Sobre su grado de culpabilidad, alegó que las supuestas prácticas normalizadas por su despacho no son supuestas, sino que se desarrollan realmente en otros despachos en Satipo y en otros distritos judiciales.

Argumento 9

Sobre el motivo determinante del comportamiento pidió considerar la declaración del fiscal [REDACTED] y las constancias de jueces y secretarios de Satipo que acreditan la práctica jurisdiccional antes descrita para la declaración de testigos y coordinaciones con el MP, aduciendo que se trata de actuaciones jurisdiccionales regulares y no motivadas por corrupción.

Argumento 10

Sobre el cuidado empleado en la preparación de la infracción, respecto del cargo A) señaló que no hubo ninguna preparación, estando acreditado que obró en coordinación con el fiscal [REDACTED]; y, en cuanto cargo B), indicó que resolvió la excepción porque ese cuadernillo fue devuelto por el superior por haber sido elevado por otro juez que lo reemplazó sin haber sido resuelto, lo que debe ser considerado.

Argumento 11

Sobre sus situaciones personales que podrían aminorar su capacidad de autodeterminación, respecto del cargo A) pidió considerar la declaración del fiscal [REDACTED] y las constancias de jueces y secretarios de Satipo, sobre las coordinaciones telefónicas con el MP, además de los reconocimientos que ha recibido por el desempeño de su labor como juez, obrantes en autos; mientras que, sobre el cargo B), requirió considerar que resolvió la excepción porque ese cuadernillo fue devuelto por el superior por haber sido elevado por otro juez que lo reemplazó, sin haber sido resuelto.



Junta Nacional de Justicia

Argumento 12

Sobre el test de proporcionalidad, bajo los principios de idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad, pidió tener en cuenta los criterios de la STC N.º 01873-2009-PA/TC y, en tal sentido, sostuvo:

- (1) Que, los cargos que se le atribuyen cuestionan su criterio jurisdiccional, especialmente en cuanto al cargo B), dado que la motivación aparente no está tipificada como falta muy grave.
- (2) Que, la sanción impuesta no es idónea ni proporcional por ser excesiva y vulnerar el principio de proscripción de la arbitrariedad y sus derechos fundamentales.

Argumento 13

La CIDH ha establecido "garantías reforzadas" en favor de los jueces para evitar actos de presión contra ellos, para no afectar la independencia judicial; por lo cual, los procedimientos disciplinarios instaurados contra los magistrados deben respetar el debido proceso, derecho de defensa, principio de legalidad y la debida motivación, para no incurrir en arbitrariedad.

Argumento 14

Pidió tener presente la documentación que adjuntó a su recurso de reconsideración, como son las copias de: un fallo del TC, de decisiones judiciales y de una decisión de la ODECMA JUNÍN, que revelan presuntas irregularidades en la actuación jurisdiccional del juez superior provisional [REDACTED], sugiriendo una posible represalia de este último por una visita judicial que hizo el investigado a la sala que dicho juez integraba; de un requerimiento acusatorio del MP en un expediente donde se liberó a un detenido en un caso de TID por haber sido pasajero de una movilidad intervenida donde se encontró droga y una felicitación del año 2011 por haber ocupado el primer puesto en producción y logro de metas durante dicho año judicial.



Junta Nacional de Justicia

III. DE LA DILIGENCIA DE INFORME ORAL PREVIO A LA AUDIENCIA DE VISTA DE LA CAUSA SOBRE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

10. La audiencia de vista de la causa se programó para el 22 de agosto 2022, habiéndose llevado a cabo en forma virtual el informe oral del investigado, como fluye de la constancia respectiva que obra en autos¹⁶.
11. En dicho informe oral el investigado reiteró los argumentos antes reseñados, que sustentan su recurso de reconsideración.

IV. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

12. A continuación, analizaremos los precitados argumentos del investigado, en el mismo orden en que fueron presentados.

Argumento 1

Respecto del cargo A), pide considerar que la asistencia obligatoria de los señores fiscales a las diligencias judiciales de declaración de testigos no se cumple ni se ha cumplido en ningún juzgado de instrucción porque solo se ha venido supliendo consignando en las actas testimoniales la supuesta concurrencia del señor fiscal, para que luego sean firmadas por éste, lo que constituye una práctica cotidiana a nivel nacional.

Análisis del Argumento 1

13. Del texto de la resolución impugnada fluye que el investigado sostiene que no debió ser sancionado con destitución, debido a que el hecho que se le imputa con relación al cargo A), constituye una práctica recurrente en Satipo y a nivel nacional.
14. Evidentemente, la supuesta masificación de una mala práctica, contraria al debido proceso y a la ley, no constituye justificación válida para sustentar una exoneración o atenuación de la responsabilidad disciplinaria probada e inclusive reconocida por el propio investigado al formular su defensa.

¹⁶ Fs. 4161



Junta Nacional de Justicia

15. En los Considerandos del 30 al 33 de la resolución impugnada, se cita el fundamento legal que evidencia la transgresión normativa y del debido proceso en que ha incurrido el investigado con relación al cargo A), en los términos siguientes:

"30. Como punto de partida, resulta de singular importancia tener presente el marco normativo que corresponde a la actuación de los representantes del Ministerio Público en los procesos penales que se encuentran en liquidación, por tanto, sujetos a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales (CdPP) y normas conexas.

31. Así, se observa que si bien el artículo 91 del CdPP señala: "A todas las diligencias de la instrucción deberá citarse al Ministerio Público, pero su concurrencia es facultativa. [...]"; dicha norma fue modificada de conformidad con la disposición contenida en el artículo 107 del Decreto Legislativo N.º 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala textualmente: "Modifícase el Código de Procedimientos Penales en su[s] artículo[s] 91, en cuanto declara facultativa la concurrencia del Ministerio Público a las diligencias judiciales, la que es obligatoria; [...]".

32. Esta disposición modificatoria guarda coherencia con la importancia de la concurrencia del representante del Ministerio Público a las diligencias judiciales, en los términos previstos por los artículos 62 y 72 del CdPP, que señalan lo siguiente:

"Artículo 62.- La investigación policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio Público, constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad, por los Jueces y Tribunales, conforme a lo dispuesto en el artículo 283 del Código."

(Según modificatoria del artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 126, publicado el 15 junio 1981)

"Artículo 72.- Objeto de la instrucción
[...]"

3. Las diligencias actuadas en la etapa policial con la intervención del Ministerio Público y las practicadas por el propio Fiscal Provincial, con asistencia del defensor, que no fueran cuestionadas, mantendrán su valor probatorio para los efectos del juzgamiento. [...]"

(Según modificatoria del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1206, publicado el 23 de septiembre de 2015)

33. Asimismo, el artículo 139 del CdPP señala textualmente que: "El juez señalará día y hora para la comparecencia del testigo, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza". Es decir, además de la obligatoriedad de la presencia del representante del Ministerio Público en las diligencias judiciales, constituye deber



Junta Nacional de Justicia

del juez señalar de manera precisa la fecha y hora para la actuación de la declaración del testigo."

3 16. Es importante precisar que la Ley Orgánica del Ministerio Público fue publicada el 18 de marzo de 1981, por lo que mal podría alegarse, por algún juez penal el desconocimiento de su artículo 107, que modificó desde el día siguiente de la precitada publicación el texto del mencionado artículo 91 del CdPP. Ello sin considerar la concordancia de dicho precepto normativo con los mencionados artículos 62 y 72 del mismo Código.

17. Por ello, en los Considerandos del 37 al 42 de la resolución impugnada se señala lo siguiente, con relación al cargo A):

37. *De la descripción de los trámites antes indicados, se advierte que el juez investigado desconoció las disposiciones normativas que regulan su actuación para los fines de las declaraciones testimoniales citadas, es decir, no verificó que previamente se haya cumplido con notificar con las formalidades de Ley al representante del Ministerio Público; por lo que en el caso de los testigos Santosa [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], dicha notificación se efectuó con fecha posterior a la de la diligencia; y en el caso de la testigo [REDACTED], nunca se efectuó tal notificación.*

38. *Cabe precisar que el hecho que en el caso de las declaraciones de los testigos [REDACTED], [REDACTED], si se haya notificado al representante del Ministerio Público, ello no justifica que en todos los demás casos no se haya consignado en acta las circunstancias relativas a la presencia de dicho representante.*

h.v. 39. *Resulta importante destacar que el incumplimiento del artículo 139 del CdPP, en lo referente al señalamiento de día y hora para la realización de la declaración testimonial, que con carácter mandatorio prevé la ley, constituye un agravante al constituir una disposición que permite que el representante del Ministerio Público pueda realizar las coordinaciones de agenda necesarias para su concurrencia; siendo las coordinaciones telefónicas insuficientes para dar cumplimiento al mandato legal expreso del CdPP.*

40. *Además, la declaración testimonial del fiscal provincial [REDACTED] no hace más que acentuar la irregularidad en los trámites antes señalados, que se pretende justificar en una práctica establecida en la zona donde ejercían sus funciones, la que no se ajusta al marco normativo que regula las mismas.*

41. *En tal sentido, las omisiones denotadas no tienen justificación alguna, pues si bien no es obligación del juez realizar las notificaciones, ni este puede garantizar la*



Junta Nacional de Justicia

presencia física del fiscal en las declaraciones testimoniales, sí constituye su deber funcional revisar los actuados correspondientes y verificar, antes de la realización de cualquier diligencia, la notificación a todas las partes procesales a fin de cautelar el derecho a la defensa y el debido proceso, así como evitar futuras nulidades, lo que evidentemente no fue tenido en cuenta por el investigado en estos casos.

42. *La inobservancia de este mandato legal de parte del investigado hizo que el Ministerio Público no pudiera ejercer su función en las declaraciones testimoniales, quedando el titular de la acción penal en estado de indefensión y la declaración del testigo a su libre albedrío, sin control del persecutor penal, lo que desnaturaliza el sentido de la prueba testimonial en el proceso penal."*

18. Por ende, del texto claro y expreso de los precitados considerandos fluye que este primer argumento del recurso de reconsideración debe ser desestimado, por cuanto se encuentra debidamente sustentado que el investigado ha incurrido en la falta muy grave que le fue imputada como cargo A).

Argumento 2

Respecto del cargo B), pide revisar los criterios ilegales e irregulares de los miembros de la Sala de Apelaciones de Satipo que declararon nula la resolución materia del indicado cargo, especialmente los contenidos en diversas decisiones supuestamente irregulares, emitidas por el señor juez superior provisional [REDACTED], integrante de dicha sala. Agrega que dicho magistrado, para anular su decisión cuestionada, ha citado una jurisprudencia dictada con posterioridad a la decisión anulada.

Análisis del Argumento 2

19. Se debe precisar que lo que ha sido materia de un análisis externo es la cuestionada decisión del investigado, es decir, el auto por el cual éste declaró fundada una excepción de naturaleza de acción, sobre la cual se advirtió, en sede disciplinaria, la vulneración del debido proceso en su expresión de debida motivación de las resoluciones.
20. Por ende, resulta impertinente analizar lo solicitado por el investigado, pues no está en discusión el criterio jurisdiccional de los miembros de la citada Sala, como tampoco lo está el del investigado.
21. En efecto, este último no ha sido sancionado por su criterio jurisdiccional, sino por la vulneración del debido proceso en su manifestación de la motivación de las resoluciones, como ha sido debidamente fundamentado en la resolución recurrida.



Junta Nacional de Justicia

22.

En tal sentido, en los considerandos del 51 al 59 de la resolución impugnada, se ha desarrollado con amplitud el conjunto de razones que sustentan y acreditan el cargo B), como fluye de su texto, que reproducimos a continuación:

"51. En tal sentido, esta Junta Nacional de Justicia no evalúa la motivación aparente que invoca el investigado, sino el cumplimiento o no de deberes judiciales, conforme se ha señalado previamente.

52. En este sentido, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado precisando el debate en torno al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al señalar en la STC - EXP. N.º 03433-2013-PA/TC, del 18 de marzo de 2014, lo siguiente:

"4). Sobre la presunta vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

[...]

4.4.2) Este Supremo Colegiado precisando el contenido del derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ha establecido que éste "[...] obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). [...] El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC N° 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).

4.4.3) El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.

4.4.4) A mayor abundamiento, este Tribunal, en distintos pronunciamientos, ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso".



Junta Nacional de Justicia

53. Bajo este marco, corresponde verificar que la conducta incurrida por el juez investigado se encuentre de los alcances que le corresponden resolver en el caso concreto de la excepción de naturaleza de acción sometida a su conocimiento.
54. El artículo 5 del CdPP establece que: "Contra la Acción Penal puede[n] deducirse la[s] Excepción[es] de Naturaleza de Acción, [...] cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente". **Esto significa que el juez investigado estaba en la obligación de fundamentar alguno de estos dos extremos para resolver dentro del marco legal la excepción planteada por el imputado** [REDACTED]
55. Siendo esto así, resulta claro que **el elemento central que expone el juez investigado para declarar fundada la excepción de naturaleza de acción se refiere a que el imputado** [REDACTED] **no ha tenido dominio del evento delictivo**, toda vez que circunstancialmente estuvo en el vehículo intervenido sin conocer la existencia de estupefacientes en el mismo.
56. Sin embargo, **no se advierte que se haya realizado el análisis respecto del tipo del delito materia del proceso penal sometido a su conocimiento, que resultaba ser el previsto por los artículos 296 y 297 numeral 7) del Código Penal, referidos a la promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y sus formas agravadas, a fin de determinar por qué, en su criterio, la conducta atribuida al solicitante no se encontraba dentro de los alcances de las normas citadas.**
57. Por el contrario, se advierte que el juez investigado realizó una valoración del material probatorio para definir los hechos y efectuar un juicio de mérito del fondo del asunto, con base en el argumento que el solicitante no tenía el dominio del evento delictivo, debido a que desconocía de la existencia de los estupefacientes en el vehículo; **siendo tal pronunciamiento uno sobre la esfera del juicio de responsabilidad penal, se ha visto alterado el debate procesal, siendo incongruente con la definición del artículo 5 del CdPP sobre la excepción de naturaleza de acción.**
58. La conducta así denotada por el juez investigado, revela que, **sin atender al carácter jurídico de la excepción de naturaleza de acción, ha pretendido justificar y amparar una decisión que sustrae al procesado de la acción de la justicia, vulnerando el deber de impartir justicia con respeto al debido proceso, específicamente en su manifestación de la motivación de las resoluciones, conducta que constituye falta muy grave.**
59. Se debe reiterar el hecho que la evaluación que realiza la Junta Nacional de Justicia no se refiere al cuestionamiento del criterio que esboza el juez investigado en la resolución cuestionada, de manera que no se afecta su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, la misma que debe precisarse encuentra sus



Junta Nacional de Justicia

límites en la Constitución y la Ley, debiendo respetar en forma irrestricta sus deberes judiciales en todos los casos que son sometidos a su conocimiento".

23. Por lo tanto, no se ha tenido en consideración, al analizar externamente la decisión cuestionada, al debate procesal mencionado por el investigado, sobre si se puede y/o debe, o no, al analizar una excepción, evaluar el material probatorio, por cuanto en este caso, como fluye claramente de los precitados considerandos, se sustenta en que el investigado no analizó ninguno de los dos supuestos específicos relacionados a la precitada excepción. Por ello, este segundo argumento también debe ser desestimado.

Argumento 3

Señala que la sanción que se le ha impuesto, cuestiona su criterio jurisdiccional, el que no está revestido de conductas antiéticas ni constituye un acto de corrupción, lo que contraviene los principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo considerarse la opinión inicial de los órganos de control disciplinarios al evaluar las faltas imputadas.

Análisis del Argumento 3

24. Al respecto, en los precitados considerandos del 51 al 59 de la resolución impugnada, se sustentan sólidamente las razones que revelan que no se ha sancionado el criterio jurisdiccional del investigado, sino la vulneración del debido proceso en su expresión de la debida motivación.
25. Además, la precitada fundamentación se complementa con lo expuesto en los Considerandos del 60 al 63 de la misma resolución, donde se señala lo siguiente:

"60. De otro lado, atendiendo a los argumentos expuestos por el juez investigado en el escrito presentado el 24 de marzo de 2022, específicamente los glosados en los considerandos 23.4, 23.5 y 23.6 de la presente resolución; debe advertirse que el debate jurisprudencial que alude en sus fundamentos se refiere a la "falta de uniformidad de criterios respecto a la posibilidad de incorporar valoraciones de tipo probatorio en el examen de procedencia de las excepciones de naturaleza de acción e improcedencia de acción", cuestión sobre la cual abunda en su informe oral.

61. Sin perjuicio del debate jurisprudencial que se invoca; ello no desnaturaliza el carácter jurídico de la excepción de naturaleza de acción, establecida por el artículo 5 del CdPP, que ya se ha mencionado previamente, el que es materia del presente procedimiento disciplinario abreviado. Es decir, no se cuestiona su criterio jurisdiccional sobre el particular, ni la circunstancia que haya valorado elementos probatorios en el análisis de la excepción; sino el hecho que los



Junta Nacional de Justicia

fundamentos centrales de su decisión, que se transcriben en el considerando 48 de la presente resolución, no revelan el análisis del tipo relativo al delito instruido (tráfico ilícito de drogas y sus formas agravadas) a partir del cual se pueda verificar con claridad que el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente.

62. *En efecto, el análisis externo que es posible hacer de la resolución en comento, evidencia que no se explicita el proceso mental a partir del cual el investigado establece si los hechos atribuidos al encausado constituyen o no delito, esto es si la conducta descrita en la apertura de instrucción corresponde con aquella prescrita en la ley penal. Tampoco se halla análisis alguno en relación a si los mismos hechos atribuidos al imputado son o no justiciables penalmente. **El magistrado investigado no formula una reflexión a partir de los hechos imputados para contrastarlos con el tipo penal, sino que lo hace desde un estadio posterior a la imputación**, el de su propia calificación de la conducta del imputado, tras valorar las declaraciones del coprocesado, testimonios actuados y demás elementos probatorios.*

63. *De esta forma, de acuerdo con los fundamentos expuestos se llega a la convicción que el juez investigado expidió la Resolución N.º 02 del 12 de abril de 2016, en el Expediente N.º 440-2015, incurriendo en vulneración del debido proceso en su manifestación de la motivación de resoluciones judiciales, conforme a la legislación vigente, siendo pasible de sanción disciplinaria."*

26. De otro lado, para la evaluación de la graduación de la sanción resulta irrelevante que no se haya mencionado que la conducta infractora del investigado se relacione con actos de corrupción o con infracciones a la ética profesional, por cuanto incluso basta incurrir en una muy grave y/o inexcusable negligencia en el cumplimiento de los deberes esenciales de la función jurisdiccional para que se justifique una sanción de destitución, como ocurre en este caso, donde esa muy grave infracción se relaciona con la vulneración del debido proceso, pilar del proceso justo.

27. Finalmente, las opiniones originarias del órgano de control no son vinculantes ni enervan la opinión final contenida en la propuesta de destitución emitida por la jefatura de la OCMA ni las consideraciones anteriormente expuestas, por lo cual esta alegación también debe ser desestimada.

Argumento 4

Pide el reexamen de la proporcionalidad considerando que se encuentra en el segundo nivel de la magistratura, donde hay mayor riesgo de error y que es un juez mixto que asumió el cargo de juez del juzgado penal liquidador por motivo de la entrada en vigencia del NCPP.



Junta Nacional de Justicia

Análisis del Argumento 4

28. Al respecto, este argumento también debe ser desestimado, en razón de que es la gravedad de las conductas del recurrente lo que motiva la sanción de destitución, conductas descritas en los cargos A) y B), que han sido debidamente acreditados en la resolución recurrida, como fluye de los ítems precedentes, donde se han reseñado los principales argumentos que permiten arribar a dicha conclusión.
29. El argumento de que es supuestamente permisible o de poca gravedad el que un juez del segundo nivel pueda vulnerar muy gravemente el debido proceso, al no respetar el mandato imperativo del texto vigente –desde 1981– del artículo 91 del CdPP sobre la citación y participación obligatoria del Ministerio Público en las diligencias respectivas –cargo A–; o por vulnerar el debido proceso, en su manifestación de la debida motivación –cargo B–, no es atendible, puesto que todo juez, desde el primer nivel, debe obrar con diligencia y claro conocimiento de la ley, para respetar el debido proceso en todas sus manifestaciones, en cualesquiera de sus contenidos esenciales.
30. Por ello, es inexcusable que el investigado pretenda soslayar sus graves inconductas, aduciendo que antes era un juez mixto y que luego pasó a ocupar una función netamente penal, pues quien ejerce la función de juez, en cualquier nivel de la judicatura, debe obrar con especial cuidado y diligencia para evitar la vulneración del debido proceso, mucho menos en la forma tan grave en que ello ha ocurrido en este caso, como ha sido ampliamente sustentado en la decisión recurrida, consideraciones por las cuales esta alegación también debe ser desestimada.

Argumento 5

Indica que no se ha producido perturbación al servicio judicial, justiciables ni abogados; no hubo dilación ni trascendencia pública negativa, pues los pobladores de Satipo saben que pueden verse involucrados en delitos de TID al hacer parar un vehículo para trasladarse por falta de transporte.

Análisis del Argumento 5

31. Al respecto, en este caso sí se ha producido una perturbación al sistema de justicia, pues como fluye de los ítems precedentes y de la resolución recurrida, las muy graves vulneraciones al debido proceso incurridas con relación a los cargos A) y B) son claras y manifiestas.
32. Es así que en el considerando 74 de la recurrida, se ha señalado que:



Junta Nacional de Justicia

“74. Sobre la perturbación al servicio judicial, se ha demostrado que el investigado actuó indebidamente. Vulneró sus deberes judiciales de impartir justicia con respeto al debido proceso. Si bien, **en relación al cargo a)** la perturbación al servicio judicial no tuvo el grado más alto de intensidad, dado que no se dedujeron nulidades como consecuencia de la tardanza y/o ausencia de notificaciones, **sí se normalizó una situación irregular contraria a ley, que impacta negativamente en el servicio judicial.**

En relación al cargo b) la perturbación cobró mucho mayor intensidad, no solo por la gravedad del delito en torno del cual se produce la infracción disciplinaria, sino por la desnaturalización que opera el investigado respecto de la excepción de naturaleza de acción, como ha sido analizado en los considerandos 45 a 63 de la presente resolución”.

33. Por ello, es inexcusable que el investigado pretenda sostener que no ha existido perturbación al sistema de justicia, ni a los justiciables, cuando la realidad es que los hechos relacionados a los cargos A) y B) sí revelan dicha perturbación.
34. En efecto, los actos del investigado no fueron inocuos en modo alguno, como está ampliamente descrito y sustentado en la resolución recurrida, por la gravísima vulneración del debido proceso descrita en los cargos A) y B), razones por las cuáles esta alegación también debe ser desestimada.

Argumento 6

Refiere que considera que se le está sancionando con destitución por el hecho de que declaró fundada la excepción en un proceso de TID, pero que eso deriva de un prejuicio, puesto que él administra justicia respetando el principio de igualdad, sin discriminar a ningún procesado por la naturaleza del delito imputado.

Análisis del Argumento 6

35. Al respecto, este extremo de la alegación debe ser desestimado por lo ya expuesto anteriormente, al haberse demostrado que no se ha sancionado su criterio jurisdiccional, sino su muy grave vulneración del debido proceso en la forma ampliamente descrita en la resolución recurrida y en los considerandos precedentes.
36. La mencionada muy grave vulneración del debido proceso en la forma descrita en los cargos A) y B), deriva de una evaluación objetiva de los hechos del caso y no de un prejuicio, como fluye de todos y cada uno de los considerandos de la recurrida, anteriormente transcritos, siendo innecesario volverlo a hacer.



Junta Nacional de Justicia

37. Dicha gravísima vulneración habría generado el mismo resultado de haberse producido en el contexto del procesamiento de cualquier otro delito. Empero, evidentemente, a mayor gravedad del delito de que se trate, mayor impacto y/o relevancia puede revestir la conducta respectiva, atendiendo a que hay bienes jurídicos cuya protección por el sistema penal demandan especial cuidado y diligencia por parte del juzgador, por su especial lesividad, peligrosidad y subsecuente rechazo social.
38. Por las consideraciones precedentes, también debe desestimarse la precitada alegación del investigado.

Argumento 7:

Sobre la trascendencia social pide considerar que ésta no se ha producido, pues no hay publicaciones periodísticas ni hubo cobertura radial ni televisiva a su decisión cuestionada; y pide considerar, en contrapartida, los reconocimientos que ha recibido por el buen desempeño de su labor jurisdiccional, los que obran en autos.

Análisis del Argumento 7

39. Al respecto, sobre este factor de graduación de la sanción disciplinaria, en el considerando 75 de la recurrida se afirma lo siguiente:

*"75. Respecto a la **trascendencia social o el perjuicio causado**, se aprecia que con su conducta el juez investigado ha inobservado flagrantemente sus deberes judiciales, impactando negativamente en la percepción del sistema judicial en su conjunto.*

40. Lo anterior se relaciona con todo lo expuesto anteriormente, vinculado además con señalado en los considerandos 65 y 66, donde se señala que:

"65. De acuerdo con los fundamentos expuestos previamente, la falta de diligenciamiento de las notificaciones al representante del Ministerio Público puso en riesgo los procesos penales, en la medida que impidió el ejercicio de control y defensa de los intereses legítimos del Estado en delitos como los procesados, de alto impacto para la sociedad y el Estado.

66. Por su parte, respecto de la resolución que dispuso admitir la solicitud de excepción y archivo del proceso penal, es importante recordar que la debida motivación de resoluciones constituye una garantía a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo este un tema que ha sido materia de reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la que resulta aplicable para los fines de establecer las faltas por



Junta Nacional de Justicia

vulneración al debido proceso en su expresión de la motivación de las resoluciones."

41. En ese orden de ideas, la trascendencia social, entendida como la difusión de los hechos cuestionados, podría ser relativa o escasa, al no haber sido publicitados en los medios de comunicación social, empero el perjuicio causado al sistema de justicia, emana de la gravísima e inexcusable vulneración del debido proceso en la forma ampliamente descrita y sustentada en las líneas que preceden y en la resolución recurrida.
42. Por ello, es también inexcusable que el investigado pretenda soslayar sus graves inconductas, aduciendo que no hubo trascendencia social ni cobertura periodística relacionada a los hechos relacionados a los cargos imputados y acreditados o que estos puedan ser minimizados por algún reconocimiento a su productividad.
43. Por estas consideraciones, esta alegación del investigado también debe ser desestimada.

Argumento 8

Sobre su grado de culpabilidad, refiere que las supuestas prácticas normalizadas por su despacho no son supuestas, sino que realmente se desarrollan en otros despachos en Satipo y en otros distritos judiciales.

Análisis del Argumento 8

44. Al respecto, sobre este elemento de graduación de la sanción, en la resolución recurrida se sostuvo que:
- "76. Respecto del **grado de culpabilidad** del juez investigado, puede concluirse fuera de toda duda razonable que tenía plena conciencia de sus actos constitutivos de inconducta funcional, admitiendo los hechos en el cargo a), aunque justificándolos a partir de supuestas prácticas normalizadas en la jurisdicción. De igual forma, en el cargo b), se advierte culpabilidad del investigado, al omitir la motivación que le era exigible, evidenciando, cuando menos, una conducta negligente, respecto de sus obligaciones."*
45. Alegar que una práctica de vulneración de la ley y/o del debido procedimiento deviene en normal y/o en no culpable y/o no sancionable por el hecho de que se trata de actos realizados por otros despachos judiciales en la misma localidad y/o en otras, resulta insostenible, mucho menos en alguien que ha ejercido la magistratura.



Junta Nacional de Justicia

46. Esa alegación carece de toda razonabilidad, pues del mismo modo que el error no es fuente de derecho, tampoco lo es la masificación de algún tipo de conducta, por lo cual dicha alegación debe ser desestimada.

Argumento 9

Sobre el motivo determinante del comportamiento pide considerar la declaración del fiscal [REDACTED] y las constancias de jueces y secretarios de Satipo que acreditan la práctica jurisdiccional para la declaración de testigos y coordinaciones con el MP, por lo que se trata de actuaciones jurisdiccionales regulares y no motivadas por corrupción.

Análisis del Argumento 9

47. Al respecto, sobre este factor de graduación de la sanción, en la resolución recurrida se sostuvo lo siguiente:

*"77. Sobre el **motivo determinante** de su comportamiento no se encuentra ninguna circunstancia susceptible de ser considerada para una eventual atenuación de su responsabilidad".*

48. En su defensa, el investigado alega nuevamente que los actos que se le cuestionan en el cargo A) no son aislados, sino que constituyen una práctica común, como se desprende de la declaración y constancias que cita. Empero, sobre ello, nos remitimos a lo expuesto en el ítem precedente.

49. Por ende, reiteramos que la recurrencia de una mala práctica, y su indebida utilización con cierta supuesta frecuencia, no la convierte en un hecho normal, regular ni permitido por el ordenamiento jurídico, por lo cual no puede sustentarse como hecho determinante que exonera o atenúa la responsabilidad, la alegada normalización de una mala práctica, como tampoco puede serlo la alegación de que las inconductas no se relacionan con actos de corrupción, pues el inexcusable incumplimiento de los deberes como juez, también puede ser sancionado con destitución, como fluye claramente de la tipificación correspondiente en la LCJ.

50. Por ello, esta alegación del investigado también debe ser desestimada, por carecer de razonabilidad.

Argumento 10

Sobre el cuidado empleado en la preparación de la infracción, respecto del cargo A), señala que no hubo ninguna preparación, estando acreditado que obró en



Junta Nacional de Justicia

coordinación con el fiscal [REDACTED] y, respecto del cargo B), señala que resolvió la excepción porque ese cuadernillo fue devuelto por el superior por haber sido elevado por otro juez que lo reemplazó, sin haber sido resuelto, lo que debe ser considerado.

Análisis del Argumento 10

51. Al respecto, sobre este factor de graduación de la sanción, en la resolución recurrida se sostuvo lo siguiente:

*"78. En cuanto al **cuidado empleado** en la preparación de la infracción tampoco se pudo considerar que el suyo fue un comportamiento casual y errático, sino que, por el contrario, en el cargo a) supuso acciones reiteradas que muestran una postura razonada que persistió en la conducta infractora. En el cargo b) tampoco se puede atribuir su conducta a un mero descuido, dada la gravedad del delito de tráfico ilícito de drogas sobre el que debía pronunciarse, circunstancia que le exigía la mayor prolijidad en la motivación de sus decisiones."*

52. En efecto, las propias alegaciones del investigado revelan que, desde su perspectiva, era normal incurrir en la mala práctica antes descrita, consistente en considerar la presencia del fiscal en las diligencias respectivas como facultativa y no como obligatoria, como manda la ley; o mediante supuestas llamadas sin constancia de haberlas realizado, entre otras, lo que denota que los hechos imputados como cargo A) eran una práctica recurrente en el investigado, quien la consideraba legal y correcta, porque otros colegas hacían lo mismo.

53. Del mismo modo, con relación al cargo B), la alegación que expone no constituye argumento alguno que justifique la vulneración del debido proceso en su expresión de debida motivación.

54. En síntesis, respecto del factor "cuidado empleado", se advierte que el investigado obró con plena conciencia y voluntad en la comisión de los actos imputados. Y, aun cuando no se revela de su parte un ánimo de ocultamiento de las infracciones mencionadas, ello no atenúa la responsabilidad disciplinaria encontrada, al advertirse la extrema negligencia con que obró y la forma en que pretende soslayar dicha realidad, con argumentos carentes de razonabilidad.

55. Por estas consideraciones, esta alegación del investigado, también debe ser desestimada.



Junta Nacional de Justicia

Argumento 11

Sobre sus situaciones personales que podrían aminorar su capacidad de autodeterminación, respecto del cargo A), pide considerar la declaración del fiscal [REDACTED] y las constancias de jueces y secretarios de Satipo, sobre las coordinaciones telefónicas con el MP, además de los reconocimientos que ha recibido por el desempeño de su labor como juez, obrantes en autos; mientras que, respecto del cargo B), pide considerar que resolvió la excepción porque ese cuadernillo fue devuelto por el superior por haber sido elevado por otro juez que lo reemplazó, sin haber sido resuelto.

Análisis del Argumento 11

56. Sobre este factor de graduación de la sanción, en la resolución recurrida se sostuvo lo siguiente:

"79. Finalmente, respecto de la posible existencia de situaciones personales que podrían aminorar la capacidad de autodeterminación del investigado, no hay ninguna que haya sido invocada por la defensa o que pueda advertirse en el expediente."

57. Al respecto, los factores de atenuación de la responsabilidad alegados por el investigado en su recurso de reconsideración son impertinentes, por cuanto, como ya se indicó anteriormente respecto del cargo A), el supuesto uso frecuente de una mala práctica no la convierte en una buena práctica, en un modo de obrar permitido por la ley, mucho menos cuando la vulneración del debido proceso y de la ley se realiza por un magistrado; y, respecto del cargo B), lo señalado no justifica en modo alguno la vulneración del debido proceso en su expresión del deber de motivación, pues el hecho de que el cuadernillo hubiera sido devuelto para que lo resolviera el investigado no podía constituir excusa para resolverlo de ese modo.

58. Por ello, es inexcusable que el investigado pretenda invocar estas razones impertinentes e inconexas para justificar una posible atenuación de su responsabilidad disciplinaria, por lo cual esta alegación también debe ser desestimada.

Argumento 12

Sobre el test de proporcionalidad y bajo los principios de idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad, pide tener en cuenta los criterios de la STC 01873-2009-PA/TC y, en tal sentido, sostiene:



Junta Nacional de Justicia

- a) Que los cargos que se le atribuyen cuestionan su criterio jurisdiccional, especialmente en cuanto al cargo B), dado que la motivación aparente no está tipificada como falta muy grave.*
- b) Que la sanción impuesta no es idónea ni proporcional, por ser excesiva y vulnerar el principio de proscripción de la arbitrariedad y sus derechos fundamentales.*

Análisis del Argumento 12

59. Al respecto, sobre la supuesta alegación del investigado de que se habría sancionado su criterio jurisdiccional ya se ha fundamentado ampliamente en los ítems que preceden y en la resolución recurrida que ello no es cierto, puesto que lo que se ha sancionado es la vulneración del debido proceso: en el caso del cargo A), por la trasgresión de normas expresas sobre la notificación y concurrencia obligatoria del representante del Ministerio Público a las diligencias pertinentes; y, respecto del cargo B), por la vulneración de dicho derecho al debido proceso, en su expresión de la debida motivación, por lo que resulta innecesario repetir dichos fundamentos, debiendo desestimarse este primer extremo del argumento materia de análisis.
60. De otro lado, sobre el segundo extremo del argumento bajo análisis, el mismo también debe ser desestimado, por cuanto la sanción no es excesiva, sino idónea y proporcional a la gravedad y naturaleza de los hechos infractores, como ha sido ampliamente sustentado en la resolución recurrida, tanto al evaluar los factores de graduación de la sanción en los considerandos 70 al 79, como al realizar el test de proporcionalidad o ponderación, como fluye del considerando 80 al 81, donde se expuso lo siguiente:

"80. Asimismo, efectuado el test de proporcionalidad o ponderación, el cual, según lo establecido por el Tribunal Constitucional, incluye, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, se advierte que:

- a) Análisis de Idoneidad. La Ley de la Carrera Judicial considera como falta muy grave: "No motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales"; siendo que en el presente caso se han verificado ambos supuestos, por lo que, la sanción de destitución a imponerse al investigado al haberse acreditado las imputaciones correspondientes a los cargos a) y b), afecta sin duda alguna al buen funcionamiento de la administración de justicia; de manera que, constituye en efecto una medida idónea que el derecho disciplinario judicial adopta al considerar como infracciones muy graves aquellas conductas que lesionen el buen funcionamiento de la administración de justicia y la credibilidad que sustenta un sistema judicial imparcial, como garantía objetiva de la función jurisdiccional y como derecho subjetivo de los justiciables.*



Junta Nacional de Justicia

b) Análisis de necesidad. El investigado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, quien venía ejerciendo la magistratura en su calidad de juez titular, tenía la obligación de conocer los deberes exigidos y prohibiciones previstas en el ejercicio de su función, que delimitan la actuación de los jueces pertenecientes al sistema de justicia. Su participación en los hechos acreditados hace que la medida de sanción impuesta sea una medida necesaria para garantizar que la afectación producida al servicio judicial y su transcendencia en el ámbito público no socaven la institucionalidad de un poder del Estado encargado de garantizar la correcta administración de justicia; una medida distinta no resultaría eficaz para dichos fines.

c) Análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.

- La imposición de la sanción de destitución al investigado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga causaría afectación a sus posibilidades de acceso a la función pública, derecho constitucionalmente reconocido a todo ciudadano con independencia de la institución en la que lo ejerza; mientras que, de otro lado, la finalidad o interés de protección del sistema de justicia se vería afectada seriamente si no se dicta la medida propuesta, por la pérdida de confianza y credibilidad de la institución garante de un sistema judicial justo e imparcial.*
- Por otro lado, frente a dicha imposición de la sanción, teniendo en cuenta la gravedad de las faltas imputadas y que su actuación la realizó con absoluta conciencia de que sus actos vulneraban los deberes impuestos a su función, resulta razonable concluir que existe un riesgo real de que el citado investigado, en caso ejerza función jurisdiccional, cometa nuevamente los hechos que son objeto de sanción. Dicho riesgo debe ser evitado por la JNJ y la única manera de satisfacer la necesidad de proteger cabalmente al sistema de justicia es aplicando la sanción de destitución propuesta.*
- Finalmente, se tiene que la destitución incide de modo directo en la esfera jurídica del investigado al restringírsele el acceso a la función pública a la que tiene derecho todo ciudadano, mientras que la necesidad de proteger al sistema de justicia, procurando evitar el riesgo de repetición de situaciones semejantes, resulta de suma importancia, justificando su mayor protección frente al citado derecho, en tanto que los hechos imputados versan sobre el incumplimiento de deberes que sostienen y dan contenido a la función judicial como lo es el del respeto al debido proceso, más aún en su expresión de la motivación de resoluciones judiciales; es decir, el respeto a los valores básicos del sistema de justicia, los cuales pueden verse mellados en mayor medida a la ya acontecida, si se encontrara en la posibilidad mediata de acceder a una determinada función dentro de la estructura estatal.*
- Conforme a lo expuesto, resulta razonable, proporcional y satisfactorio a los fines del procedimiento disciplinario, imponer la sanción de destitución, con el fin de*



Junta Nacional de Justicia

evitar que el investigado u otros jueces o juezas repitan hechos como los que han sido objeto de investigación, lo que demanda mayor necesidad de tutela y/o protección, frente a la posibilidad o alternativa de aplicar una sanción de menor intensidad, que no sería acorde con la conducta evaluada, constituyendo esto último un riesgo para la administración de justicia, así como para la protección de la credibilidad, confiabilidad, eficiencia, reputación y honorabilidad del Poder Judicial.

81. Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión que la sanción de destitución es idónea, necesaria y proporcional."

61. Por estas consideraciones, se desestima la alegación del investigado, por cuanto en la resolución recurrida se ha cumplido con expresar todos los parámetros del test de ponderación desarrollados por el TC en diversas resoluciones, entre ellas la citada por el investigado.

Argumento 13

Que la CIDH ha establecido "garantías reforzadas" en favor de los jueces para evitar actos de presión contra ellos, para no afectar la independencia judicial; por lo cual, los procedimientos disciplinarios instaurados contra magistrados, deben respetar el debido proceso, derecho de defensa, principio de legalidad y la debida motivación, para no incurrir en arbitrariedad.

Análisis del Argumento 13

62. Al respecto, a lo largo de los ítems precedentes y de la resolución recurrida, fluye con claridad que en esta última no se ha vulnerado en modo alguno el debido proceso, el derecho de defensa ni los principios de legalidad y debida motivación.
63. En efecto, el investigado ha podido ejercer su derecho de defensa con amplitud y todos sus argumentos esenciales han sido debidamente valorados; del mismo modo, no se ha vulnerado el principio de legalidad, en la medida que, lo reiteramos, lo que se ha sancionado es la vulneración del investigado de su deber de impartir justicia con respeto al debido proceso, como ha sido ampliamente sustentado, siendo que, respecto del cargo A), se ha manifestado en la vulneración del marco normativo que regula la obligatoria participación del representante del Ministerio Público en las diligencias pertinentes; mientras que, respecto del cargo B), dicho principio fue vulnerado en su expresión del deber de motivación, como se ha desarrollado anteriormente.



Junta Nacional de Justicia

64. Por todo lo anterior, la resolución recurrida no ha vulnerado los derechos y garantías antes mencionados, encontrándose debidamente justificada, respetando los parámetros de motivación expuestos por el TC en diversos pronunciamientos, por lo que este penúltimo argumento del recurso de reconsideración también debe ser desestimado.

Argumento 14

Pide tener presente la documentación que adjunta a su recurso de reconsideración, como son las copias de: un fallo del TC, decisiones judiciales y una decisión de la ODECMA JUNÍN, que revelan presuntas irregularidades en la actuación jurisdiccional del juez superior provisional [REDACTED] sugiriendo una posible represalia de este último por una visita judicial que hizo el investigado a la sala que dicho juez integraba; de un requerimiento acusatorio del MP en un caso donde se liberó a un detenido en un caso de TID por haber sido pasajero de una movilidad intervenida donde se encontró droga y una felicitación del año 2011 por haber ocupado el primer puesto en producción y logro de metas durante dicho año judicial.

Análisis del Argumento 14

65. Al respecto, la documentación adjunta antes reseñada no enerva en modo alguno los fundamentos y consideraciones ya expuestos ni los contenidos en la decisión recurrida, por cuanto en este procedimiento disciplinario lo que se ha ventilado es la conducta del investigado descrita en los cargos A) y B) y no las supuestas irregularidades que éste imputa al mencionado colegiado que, en su oportunidad, anuló su decisión sobre la excepción de naturaleza de acción, lo que, en todo caso, debió denunciar en su oportunidad, ante el órgano de control disciplinario.
66. De otro lado, la documentación restante no enerva las consideraciones que sustentan su responsabilidad disciplinaria, por versar sobre otras situaciones y/o hechos, ajenos a los que son materia de evaluación en este procedimiento disciplinario.
67. Por estas consideraciones, esta última alegación del investigado también debe ser desestimada.



Junta Nacional de Justicia

CONCLUSIÓN FINAL

68. Estando al análisis integral de los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración, se tiene que la Resolución N.º 039-2022-PLENO-JNJ, mediante la cual la Junta Nacional de Justicia impuso la sanción disciplinaria de destitución al abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por su actuación como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, es racionalmente adecuada y justificada a los muy graves actos de inconducta debidamente acreditados, habiéndose aplicado criterios de razonabilidad y proporcionalidad, motivo por el cual el recurso de reconsideración en materia deviene en infundado.

Por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades previstas por los artículos 150 y 154, inciso 3, de la Constitución Política; de conformidad a lo establecido en los artículos 2 literal f., 26 y 45, numeral 45.1, literal d) de la Ley N.º 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y el artículo 79 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobado mediante la Resolución N.º 008-2020-JNJ, modificada por Resolución N.º 048-2020-JNJ; y, estando al acuerdo de fecha 27 de enero de 2023, adoptado por unanimidad por los señores Miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, sin la participación del señor Guillermo Santiago Thornberry Villarán, por su condición de miembro instructor, y sin la asistencia de la señora Imelda Julia Tumialán Pinto, por tener abstención con respecto del señor Edgard Chuquillanqui Huaranga

SE RESUELVE:

Artículo primero. Declarar **INFUNDADO** en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga contra la Resolución N.º 039-2022-PLENO-JNJ del 30 de marzo de 2022, que le impuso la sanción disciplinaria de destitución como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, por los fundamentos de la parte considerativa de la presente resolución.


Artículo segundo. **OFICIAR** a la señora Fiscal de la Nación y al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para los fines pertinentes.



Junta Nacional de Justicia

Artículo tercero. Declarar AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA.

Regístrese, comuníquese y archívese.


ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS


HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA


LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO


ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES


MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES



Junta Nacional de Justicia

Resolución N.º 039-2022-PLENO-JNJ

P.D. N.º 149-2020-JNJ

Lima, 30 de marzo de 2022

VISTO;

El Procedimiento Disciplinario N.º 149-2020-JNJ, seguido contra el abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por su actuación como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, y, la ponencia del señor Aldo Vásquez Ríos; y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos materia de imputación se originan en diversas resoluciones dictadas por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora en adición de sus funciones de Satipo, la que en el trámite de los procesos penales correspondientes a los expedientes N.º 055-2015, N.º 440-2015 y N.º 441-2015, detectó que el juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, habría incurrido en presuntas conductas disfuncionales, las que fueron comunicadas en su oportunidad a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Junín.
2. Las resoluciones dictadas fueron materia de las siguientes comunicaciones de la Sala Penal de Apelaciones de Satipo:
 - Oficio N.º 2579-2016 (Exp. 441-2015)-SPAS-CSJJU/PJ¹, del 08 de junio de 2016.
 - Oficio N.º 2539-2016 (Exp. 055-2012) SPAS-CSJJU/PJ², del 02 de junio de 2016.
 - Oficio N.º 2953-2016 (Exp. N.º 440-2015) SPAS-CSJJU/PJ³, del 10 de junio de 2016.
 - Oficio N.º 5958-2016-(440-2015)-SPAS-CSJJU/PJ⁴, del 28 de diciembre de 2016.
 - Oficio N.º 7116-SPAS-CSJJU-PJ (441-2015)⁵, del 28 de diciembre de 2016.

¹ Fojas 1130.

² Fojas 1291.

³ Fojas 2004.

⁴ Fojas 2132.

⁵ Fojas 2137.



Junta Nacional de Justicia

- Oficio N.° 5956-2016-(440-2015)-SPAS-CSJJU/PJ⁶, del 28 de diciembre de 2016.
3. Como consecuencia de las citadas comunicaciones, por Resolución N.° Dos, del 10 de marzo de 2017⁷, la Odecma-JUNÍN dispuso la apertura de procedimiento administrativo disciplinario contra Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, en su actuación como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, signado como Investigación N.° 563-2016, acumuladas con las investigaciones N.° 566-2016, N.° 690-2016 y N.° 030-2017.

Posteriormente, por Resolución N.° Nueve⁸ del 20 de diciembre de 2017, se dispuso la acumulación de la investigación N.° 480-2017.

4. El procedimiento fue tramitado conforme a su naturaleza, a cuyo término la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura dictó la Resolución N.° 23⁹, del 10 de febrero de 2020, estableciendo dos supuestos de hecho imputables al juez investigado, que ameritarían responsabilidad disciplinaria, susceptibles de la imposición de sanción de destitución, siendo los siguientes:

§ Incumplimiento de deberes judiciales en el extremo de impartir justicia con respeto al debido proceso.

- a) Expediente N.° 441-2015, proceso penal seguido contra Percy Albarino Bernal Panduro y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado.

- Por escrito presentado el 09 de noviembre de 2015, los imputados [REDACTED] y [REDACTED] ofrecieron como medios probatorios de descargo las declaraciones testimoniales de [REDACTED] y [REDACTED]; advirtiéndose que las diligencias se llevaron a cabo el 16 de noviembre de 2015 a las 11:00 y 11:30 horas, respectivamente; no obstante, el Ministerio Público fue notificado el mismo 16 de noviembre de 2015, a las 12.45 horas; es decir, después de recibidas las declaraciones testimoniales.
- Por escrito presentado el 16 de noviembre de 2015, los imputados [REDACTED] y [REDACTED] ofrecieron como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED]; verificándose que la diligencia se llevó a cabo el 26 de

⁶ Fojas 2148.

⁷ Fojas 2354 - 2370

⁸ Fojas 3002 - 3004

⁹ Fojas 3553 a 3567



Junta Nacional de Justicia

noviembre de 2015; no obstante, el Ministerio Público fue notificado el 27 de noviembre de 2015; es decir, al día siguiente de recibida la declaración testimonial.

- Por escrito presentado el 05 de enero de 2016, el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo las declaraciones testimoniales de [REDACTED] y [REDACTED]; tales diligencias se llevaron a cabo el 08 de enero de 2016, a las 14:00 y 14:30 horas, respectivamente; sin embargo, no obra en autos el cargo de notificación correspondiente al representante del Ministerio Público.
- b) Expediente N.º 440-2015, proceso penal seguido contra [REDACTED] y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado.
- Por escrito presentado el 11 de agosto de 2015, el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo las declaraciones testimoniales de [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED]; observándose que las diligencias se realizaron, en el primer caso el 24 de agosto de 2015; y, en los dos últimos casos el 31 de agosto de 2015. Si bien el Ministerio Público fue notificado el 18 de agosto de 2015, no se dejó constancia en actas de la presencia de su representante en dichas diligencias.
 - Por escrito presentado el 15 de septiembre de 2015, el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED], diligencia que se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2015. Si bien el Ministerio Público fue notificado el 18 de septiembre de 2015, no se dejó constancia en actas de la presencia de su representante en dichas diligencias.
 - Por escrito presentado el 21 de septiembre de 2015, el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED], apreciándose que la diligencia se realizó el 02 de octubre de 2015; sin embargo, el Ministerio Público fue notificado el 12 de octubre de 2015; es decir, después de la citada testimonial.
 - Por escrito presentado el 24 de septiembre de 2015, el imputado [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED], observándose que la diligencia se



Junta Nacional de Justicia

produjo el 12 de octubre de 2015, a las 14:00 horas; sin embargo, el Ministerio Público fue notificado el mismo 12 de octubre de 2015, a las 15:51 horas; es decir, después de la citada testimonial.

- Por escrito presentado el 11 de diciembre de 2015, la imputada [REDACTED] [REDACTED] ofreció como medio probatorio de descargo la declaración testimonial de [REDACTED], advirtiéndose que la diligencia se llevó a cabo el 20 de enero de 2016; sin embargo, no obra en autos la constancia de notificación al Ministerio Público.

- c) En ninguno de los casos anteriormente citados se dejó constancia en actas de la presencia del representante del Ministerio Público.

§ *Vulneración al debido proceso en su expresión de motivación de las resoluciones.*

- d) Los hechos vinculados a la imputación de vulneración al deber de motivación se relacionan con la expedición de la Resolución N.º 02, del 12 de abril de 2016, dictada en el trámite del expediente N.º 440-2015, por el que se declaró “fundada” la excepción de naturaleza de acción planteada por el imputado [REDACTED]

- e) En síntesis, el cuestionamiento central en este aspecto radica en el hecho que el juez investigado emitió un pronunciamiento de fondo respecto a la presunta responsabilidad o no del solicitante, en la comisión del delito imputado, lo que no es materia de determinación y pronunciamiento en un incidente de excepción de naturaleza de acción; sin exponer fundamentos concretos y objetivos que expliquen las razones del por qué la conducta atribuida al solicitante no se encuadraba dentro del supuesto descrito por los artículos 296 y 297 numeral 7) del Código Penal.

5. Por oficio N.º 000164-2020-P-PJ, recibido el 16 de septiembre de 2020, el presidente del Poder Judicial remitió la Investigación Definitiva N.º 563-2016-Junín, que contiene la Resolución N.º 23 -de fs. 3553 a 3567-, que sustenta la propuesta de destitución del abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por su actuación como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior de Justicia de Junín; cuyos antecedentes con todo el acervo documentario y medios probatorios actuados en dicho expediente se han tenido a la vista para los fines de la presente resolución.



Junta Nacional de Justicia

II. CARGOS IMPUTADOS

6. Por Resolución N.º 048-2021-JNJ del 28 de enero de 2021¹⁰, la Junta Nacional de Justicia abrió procedimiento disciplinario abreviado al abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaringa, por su actuación como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, imputándole los cargos siguientes:

- a) *Haber recabado declaraciones testimoniales en los expedientes de los procesos penales N.º 441-2015 y N.º 440-2015, sin notificar debidamente a los testigos y al representante del Ministerio Público, lo cual originó que dichas diligencias se llevaran a cabo sin la presencia del representante del Ministerio Público.*

Con la conducta atribuida el magistrado habría presuntamente inobservado el deber previsto en el artículo 34 numeral 1)¹¹ de la Ley de Carrera Judicial – Ley N.º 29277, concordante con el principio de la función jurisdiccional preceptuado en el artículo 139 inciso 3¹² de la Constitución Política; incurriendo en la comisión de la falta muy grave tipificada en el artículo 48 numeral 13)¹³ de la invocada Ley de Carrera Judicial.

- b) *Haber vulnerado el deber de observar el debido proceso en su expresión de la motivación de las resoluciones, al emitir la Resolución N.º 02 de fecha 12 de abril de 2016, en el expediente N.º 440-2015-70, que amparó una excepción de naturaleza de acción.*

Con la conducta imputada al magistrado habría presuntamente inobservado el deber previsto en el artículo 34 numeral 1) de la Ley de Carrera Judicial – Ley N.º 29277, concordante con el principio de la función jurisdiccional preceptuado en el artículo 139 inciso 5¹⁴ de la Constitución Política; incurriendo en la comisión de la falta muy grave tipificada en el artículo 48 numeral 13) de la invocada Ley de Carrera Judicial.

¹⁰ Fojas 3730 a 3731.

¹¹ **Artículo 34.- Deberes:**

Son deberes de los jueces:

1. *Impartir justicia con [...]respeto al debido proceso;*

¹² **Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:**

[...]

3. *La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.*

¹³ **Artículo 48.- Faltas muy graves:**

Son faltas muy graves:

[...]

13. *No motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales.*

¹⁴ **Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:**

[...]

5. *La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.*



Junta Nacional de Justicia

SOBRE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR POR VENCIMIENTO DEL PLAZO EXTRAORDINARIO.-

7. Por escrito del 04 de abril de 2021¹⁵, el magistrado investigado se apersonó al procedimiento disciplinario abreviado y solicitó que se declare de oficio la caducidad automática por vencimiento del plazo extraordinario (más 13 meses) de la medida cautelar de suspensión preventiva en el cargo de juez impuesta por la OCMA, en la investigación N.º 563-2016-Junín, mediante Resolución N.º 23 del 10 de febrero de 2020, que fuera prorrogada “ilegalmente” (*sic*) por Resolución N.º 24 del 21 de agosto de 2020.
8. En el citado escrito el juez investigado expuso los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su petición, precisando que el día 18 de febrero de 2021 caducó automáticamente de pleno derecho la medida cautelar de suspensión en el cargo de juez, por vencimiento del plazo extraordinario, en concordancia con lo dispuesto por las siguientes disposiciones normativas: a) cuarto párrafo del artículo 60 de la Ley de la Carrera Judicial - Ley N.º 29277; b) Numeral 3) del artículo 45 del Reglamento de la OCMA; c) Artículo 45.4 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (LOJNJ) - Ley N.º 30916; y, d) Artículo 91 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ.
9. Sobre este extremo, previo al análisis de fondo, corresponde establecer las siguientes consideraciones:
 - 9.1. El artículo 45 de la LOJNJ, en su parte inicial precisa lo siguiente: *“En los procedimientos disciplinarios a que se refiere el artículo 43 de la presente ley, rigen las siguientes normas: [...]”*.
 - 9.2. El artículo 43 de la LOJNJ establece el marco normativo que corresponde al procedimiento que sigue la Junta Nacional de Justicia, a efectos de aplicar la sanción de destitución prevista por el artículo 154 inciso 3 de la Constitución Política del Estado.
 - 9.3. Resulta claro que dicho marco no corresponde ser aplicado para procedimientos seguidos ante instituciones distintas a la Junta Nacional de Justicia.

¹⁵ Fojas 3737 a 3742



Junta Nacional de Justicia

- 9.4.** En consecuencia, las normas del Título XVI del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, que regulan la medida cautelar de suspensión preventiva, entre las que se encuentra el artículo 91 que invoca el investigado, no son de aplicación a la Investigación N.º 563-2016-Junín desarrollada por el órgano de control del Poder Judicial.
- 9.5.** Dadas las normas antes indicadas, en concordancia con el principio de legalidad establecido por el numeral 1.1 del artículo IV, del Título Preliminar del TUO de la Ley N.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, la Junta Nacional de Justicia solo es competente para pronunciarse respecto de las medidas cautelares que se hubieren dictado en el marco de los procedimientos disciplinarios seguidos ante esta sede, conforme a sus atribuciones constitucionales.
- 9.6.** Por los fundamentos expuestos, la petición formulada por el doctor Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, para que se declare de oficio la caducidad de la medida cautelar de suspensión preventiva impuesta por la OCMA, deviene en improcedente.

III. DESCARGOS PRESENTADOS POR EL INVESTIGADO

- 10.** Posteriormente, por escrito recibido el 16 de abril de 2021, el juez investigado formuló sus descargos sobre las imputaciones formuladas en su contra, en el siguiente sentido:

§ Con relación al cargo “a”

- 10.1.** Señala que durante los años 2015 a 2017 en el juzgado a su cargo laboraban 03 secretarios judiciales, quienes, por no contar con asistentes judiciales, realizaban labores de notificadores, algunas veces hacían de mesa de partes de sus secretarías, atendían a los abogados y cosían sus expedientes. Sus labores se complicaron cuando se instaló el Sistema Integrado Judicial, especialmente, por los problemas de señal de internet porque se cortaba y hasta la fecha se continúa cortando en la provincia de Satipo. Sin embargo, pese a todas estas dificultades, siempre se cauteló el respeto irrestricto al debido proceso mereciendo sendos reconocimientos de parte de la población, del Ministerio Público, Defensa Pública, abogados, y demás autoridades locales de la provincia de Satipo, conforme se puede advertir del contenido de los Memoriales que corren de folios 2414 y 2423, de fecha 13 de febrero de 2017, presentados al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y de folios 2421 a 2433 presentados a la OCMA el día 13 de febrero del 2017; así como también, los Memoriales presentados por el Presidente de la Asociación de Abogados de Satipo al CEPJ el día 17 de noviembre del 2017 que corren de



Junta Nacional de Justicia

folios 3117 a 3147, y los Memoriales presentados por el Presidente del Frente de Defensa de los Intereses y del Desarrollo Integral del Distrito de Pichanaqui – Selva Central, Avelino Paredes Payano, al CEPJ, con fecha 19 de diciembre de 2017, los cuales corren de fojas 3148 a 3179 y 3404 a 3541, presentados ante la OCMA.

- 10.2.** Respecto a las resoluciones que admiten las declaraciones testimoniales en los juzgados de la provincia de Satipo, desde hace más de 29 años, al igual que en otros distritos judiciales, disponen que se reciban en audiencia inmediata dentro de los tres o cinco días de notificado, conforme obra de fs. 3088 a 3147, resoluciones judiciales que datan del año 1992, porque es la forma más idónea de cautelar los principios procesales de inmediación, economía, concentración y celeridad procesal, previstos en el Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil – CPC, en concordancia con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial - LOPJ, para no perjudicar a los justiciables y no vulnerar el debido proceso.
- 10.3.** En ese sentido, indicó que no se fija fecha y hora específica para la declaración testimonial porque, en primer lugar, *"en los procesos penales se consideran hábiles todas las horas y días del año"* (Art. 126 de la LOPJ); en segundo lugar, porque si se señala día y hora para la audiencia, en la mayoría de casos no se lleva a cabo porque, el día de la audiencia, revisado el expediente, el secretario emite razón "dando cuenta" de que "no regresaron los cargos de notificación" y, si regresaron, tienen la constancia del notificador que "no pudo ubicar el domicilio" porque no tiene numeración, manzana ni lote y solamente han señalado que domicilia en la CC.NN. "tal", CC.PP "tal", Anexo "tal" o Fundo "tal" -ver fs. 735- y que, para llegar a los domicilios, no hay movilidad exclusiva del Poder Judicial ni buses, ni taxis, en toda la provincia ya que solo se movilizan con mototaxis.
- 10.4.** Sostiene que si él y los demás jueces de zonas periféricas actuaran conforme al criterio de la OCMA, sencillamente se frustrarían las audiencias para la toma de testimoniales y al final tendría que dictarse sentencia sin haberse actuado las pruebas ofrecidas por las partes procesales y esto sí vulneraría el debido proceso, específicamente el derecho a probar de las partes procesales que, finalmente, es advertido por la instancia superior, declarando nulas las actuaciones o la resolución subida en grado; y esto no ha sucedido en los procesos penales N.º 440-2015 y N.º 441-2015.
- 10.5.** Agregó que por la especialidad penal o la forma en la que se imparte justicia en zonas periféricas del país, el pronunciamiento de la doctora Ana María Aranda Rodríguez realizó un análisis más objetivo y arreglado a ley para



Junta Nacional de Justicia

resolver la primera medida cautelar de suspensión preventiva contra el investigado, declarándola improcedente, sin soslayar los principios generales del proceso; y, especialmente, el principio de convalidación, subsanación o integración prevista en el CPC en aplicación supletoria.

- 10.6.** Además, precisa que, ejerciendo sus funciones con respeto al debido proceso, en todos los expedientes que tuvo a cargo liquidó su carga procesal en agosto de 2017, siendo su Juzgado el primer y único juzgado penal liquidador que liquidó su carga procesal en dicho año; y, por ello, se convirtió en Juzgado de Investigación Preparatoria de Pichanaqui, trasladándose a ese distrito conforme se puede advertir de lo descrito en el numeral 14) del segundo considerando de la Resolución Administrativa N.º 248-2017-CE-PJ1º del 09 de agosto de 2017 y ejecutada mediante R.A. N.º 1254-2017- P.CSJUU/PJ del 28 de agosto de 2017 (ANEXO 2-A). Sin embargo, este mérito lo habría perjudicado profesionalmente, porque para el año judicial 2018 fue designado juez superior provisional para integrar la Sala de Apelaciones de Satipo, permaneciendo solo un mes porque el 50% de carga procesal para absolver el grado pertenecía a su Juzgado, conforme se puede advertir del considerando Tercero de la R. A. N.º 023-2018-P- CSJSC/PJ del 31 de enero de 2018 (ANEXO 2-B).
- 10.7.** Sobre las testimoniales, para cada una, el secretario judicial [REDACTED], quien labora más de 23 años en el Poder Judicial, dio cuenta al investigado de la concurrencia de cada uno de los testigos al local del Juzgado, asimismo, informó que se había comunicado por celular con el señor fiscal [REDACTED] fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Satipo, quien le manifestó que no iba a participar y, seguidamente, se procedió a recabar la declaración testimonial. En ese sentido, estarían corroboradas las comunicaciones telefónicas entre el secretario judicial y el fiscal con la declaración jurada del señor fiscal [REDACTED] -a fs. 3398- y con la declaración jurada del secretario [REDACTED] - de fs. 2718 y 3399-; por lo tanto, el señor fiscal sí tuvo conocimiento previo y, siendo su facultad asistir o no, no asistió
- 10.8.** Con respecto a los testigos que concurrieron opera el principio de convalidación de las notificaciones, porque si los sujetos procesales proceden de manera que pongan de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución, el juez lo convalida y lleva a cabo el acto procesal; en consecuencia, no se ha vulnerado el debido proceso porque existe resolución que admite al testigo, el testigo ha concurrido a declarar y el fiscal tomó conocimiento previo. El investigado actuó ceñido a los principios procesales del debido proceso, y tampoco se consideró la constancia suscrita



Junta Nacional de Justicia

por los jueces y fiscales de la Provincia de Satipo respecto a la toma de testimoniales -de fs. 2307 y 2398-.

10.9. Agregó que, en todo caso, ante el supuesto negado de que el señor fiscal no hubiera tomado conocimiento oportuno, lo que le impidió participar en la testimonial, también habría operado el principio de convalidación de actos procesales si, habiendo tomado conocimiento de ello, el fiscal no formuló tacha contra dicha testimonial para que no se tome en cuenta al momento de resolver. Ello, en la medida que el fiscal es el contralor de la legalidad y si no lo ha hecho, es precisamente porque conforme ha declarado, sí tomo tomó conocimiento oportuno.

10.10. Manifiesta que la señora Jefa de la OCMA pretende que se le sancione tan drásticamente por el hecho de que el secretario [REDACTED] no dejó constancia de la notificación telefónica con el señor fiscal [REDACTED] empero ello no acarrea nulidad alguna, porque el señor fiscal no ha tachado ninguna de las testimoniales, por el contrario, ha convalidado todas las notificaciones y las testimoniales y todas estas actuaciones procesales, que se han realizado de buena fe y en pos de no frustrar actuaciones procesales admitidas dentro del proceso, las mismas que están respaldadas por el principio rector de presunción de licitud de la función contralora, prevista en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Oficina de Control de Magistratura del Poder Judicial -Reglamento de la OCMA; máxime si no hay evidencia en contrario que pueda haber obedecido a un acto de corrupción.

10.11. De manera específica, el investigado se refiere a cada una de las testimoniales que se indican en la propuesta de destitución, señalando lo siguiente:

En el expediente N.º 441-2015

- Sobre las testimoniales de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]; no se ha considerado que el secretario [REDACTED] coordinó con el fiscal [REDACTED], para que después de recibir las testimoniales le haga llegar las notificaciones para que el fiscal las archive en su legajo de notificaciones, y que la presencia del fiscal es facultativa, y estando presentes los testigos se convalidaron las notificaciones para ellos. Y, en todo caso, el fiscal convalidó estas testimoniales porque no formuló tacha contra las mismas, incluso el fiscal superior las consideró en su Dictamen Acusatorio -fs. 1093/1109-.



Junta Nacional de Justicia

- Sobre las testimoniales de [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED], se incurre en error al señalar que no obran los cargos de notificación al fiscal ya que se le notificó el día 08 de enero de 2016 a las 09:20 horas, esto es, antes de que se reciban las testimoniales, conforme corre en el reporte de seguimiento del expediente -de fs. 511-512- del primer cuaderno cautelar, y tampoco se ha considerado que estando presentes los testigos se convalidaron las notificaciones para ellos. Y, en todo caso el fiscal, también, convalidó estas testimoniales porque no formuló tacha contra las mismas, incluso el fiscal superior las consideró en su Dictamen Acusatorio -fs. 1093/1109-.

En el expediente N.º 440-2015

- Sobre las testimoniales de [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED], las notificaciones al fiscal se realizaron, en el caso de los tres primeros, 12 días antes de recibirse las testimoniales; y, en el último caso, 10 días antes; y, previamente a que se reciban las testimoniales, el secretario [REDACTED] se comunicó con él, quien le dijo que no participaría y la notificación a los testigos se convalidó con su concurrencia y disposición para llevar a cabo la diligencia. Y, en todo caso el fiscal convalidó estas testimoniales porque no formuló tacha contra las mismas -dictamen de fs. 1895-, incluso el fiscal superior las consideró en su Dictamen Acusatorio sin formular observaciones -fs. 1974/1984-.
- Sobre las testimoniales de [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED]; en el primer caso, la notificación al fiscal se realizó el mismo día y minutos antes de recibirse la testimonial; y, en el segundo caso, la notificación al fiscal se realizó el mismo día, después de recibirse la testimonial; en ambos casos el secretario [REDACTED] se comunicó con el fiscal, quien le dijo que no participaría y la notificación a los testigos se convalidó con su concurrencia y disposición para llevar a cabo la diligencia. Y, en todo caso, el fiscal convalidó estas testimoniales porque no formuló tacha contra las mismas -dictamen de fs. 1895-, incluso el fiscal superior las consideró en su Dictamen Acusatorio sin formular observaciones -ver fs. 1974/1984-.
- Sobre la testimonial de [REDACTED], el secretario [REDACTED] entregó la notificación para el fiscal al encargado de notificaciones. Este tendría la costumbre de devolver las notificaciones con el sello de “no se ubicó el domicilio”, “falta calidad de domicilio” o “constituido al lugar se dejó bajo puerta”. Señala el investigado que este es



Junta Nacional de Justicia

otro de los problemas que tiene esa sub sede judicial, porque el personal que contrata la Corte no radicaba en Satipo y mucho menos conocen la provincia y casi nunca salen a notificar fuera del cercado de Satipo, porque dicen que la Administración de la Corte no les devuelve los gastos. Es por ello que las llamadas telefónicas eran más efectivas, así como también la convalidación de las notificaciones respecto a los testigos. En conclusión, la única notificación física que no se entregó al señor fiscal es la de esta testigo, pero se le comunicó por teléfono antes de la diligencia. Y, en todo caso, el fiscal convalidó esta testimonial porque no formuló tachas contra la misma -ver dictamen de fs. 1895-, incluso el fiscal superior las consideró en su Dictamen Acusatorio sin formular observaciones -ver fs. 1974/1984-

Sobre la no consignación de la presencia del representante del Ministerio Público en Actas.

- En este extremo señaló que es conocido el hecho que en casi todos los órganos jurisdiccionales de instancia los secretarios tienen la costumbre de tomar las testimoniales sin presencia del juez ni del fiscal, pues solo los consignan en las actas para que luego el señor fiscal las pase a firmar; Precisa que esa práctica quedó desterrada en su juzgado desde que asumió la titularidad, porque habían letrados que con justa razón reclamaban la presencia del juez y del fiscal, y porque los justiciables hacían malos comentarios sobre esta forma de llevar a cabo las diligencias.

§ Con relación al cargo “b”

10.12. Entre los aspectos relevantes a la imputación, señala el juez investigado que la Resolución N.º 02, del 12 de abril de 2016, materia de cuestionamiento, contiene seis considerandos: los dos primeros descriptivos (cuestiones fácticas); el tercero que describe la norma referida al artículo 5 del Código de Procedimientos Penales sobre la procedencia de la excepción y su procedencia cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, resaltando su procedencia en el caso concreto ante la inconcurrencia del elemento de tipicidad subjetiva respecto al delito que se le atribuye -el dolo- (cuestiones normativas); el cuarto y el quinto que analizan el caso concreto para determinar si efectivamente concurre o no el elemento de tipicidad subjetiva -dolo- en el delito que se atribuye al excepcionante (cuestiones analíticas de fundabilidad o no); y, el sexto, que resalta las cuestiones doctrinarias y jurisprudenciales citando al magistrado Cesar San Martín en su obra “Proceso Penal”, Volumen II, Editorial Grijley, Año 2000, página 1015 y el Acuerdo Plenario N.º 06/97 del 14 de diciembre de 1997, aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la República que



Junta Nacional de Justicia

señala que: *“la ausencia de dolo o de elementos subjetivos del delito, constituye causa suficiente para amparar las Excepciones de Naturaleza de Acción”.*

- 10.13.** Precisa, además, que la resolución de la OCMA que sustenta el pedido de destitución no ha realizado un análisis integral de la Resolución N.º 02 que resuelve la excepción, solamente ha reproducido el considerando cuarto que, incluso, ha recortado, y solamente repite los criterios vertidos por la Sala de Apelaciones de Satipo en su auto relevante, cuyo ponente fue el juez superior provisional [REDACTED], quien se interesó demasiado en este proceso penal y en el Expediente N.º 441-2015; y, para declarar nula la Resolución N.º 02 aplicó, indebidamente, la Casación N.º 407-2015-TACNA de fecha 07 de junio de 2016, dictada con posterioridad a la emisión de la Resolución N.º 02, hoy cuestionada.
- 10.14.** Indica que la resolución N.º 02 ya ha sido materia de pronunciamiento en el cuaderno cautelar N.º 563-1-2016, que acompaña al principal, al haber dictado la jefatura de la OCMA la Resolución N.º 02 del 23 de julio de 2018 -fs. 685 a 702-, declarando improcedente la primera medida cautelar de suspensión preventiva, con el fundamento del numeral 4.18 en el sentido que el investigado había incurrido en motivación aparente; siendo que apelada por la sociedad civil tal resolución, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante resolución del 05 de junio de 2019 -fs. 782 a 810- confirmó la resolución de improcedencia, señalando en la parte final de su considerando vigésimo que: *“En tal sentido, al existir una motivación aparente, no llega a estar dentro del supuesto de falta de motivación o resolución no motivada, por lo que en este extremo no existen suficientes elementos de convicción que acrediten el cargo atribuido al investigado”.*
- 10.15.** En tal sentido, señala que la falta muy grave relativa a la motivación de las resoluciones judiciales solo sanciona la **“no motivación”**; y, como puede advertirse del contenido de la Resolución N.º 02, que resuelve la excepción de naturaleza de acción, cuestionada, sí tiene motivación, a criterio del investigado es insuficiente, porque es consciente que le faltó desarrollar más el elemento subjetivo del tipo penal atribuido a la excepcionante; no obstante, los fiscales que intervinieron fueron de la misma opinión, es por ello que la resolución cuestionada se dictó de conformidad con el dictamen fiscal.



Junta Nacional de Justicia

IV. MEDIOS Y ACTUACIONES PROBATORIAS

11. Para el análisis de los hechos que sustentan la imputación de cargos formulada en el presente procedimiento disciplinario abreviado, se han tenido en consideración los elementos de prueba siguientes:
- a) Elementos de prueba recopilados en el marco de la Investigación Definitiva N.º 563-2016-Junin.
 - b) Actuados del presente procedimiento disciplinario, incluyendo las declaraciones en calidad de testigos ofrecidas por el magistrado investigado, así como los antecedentes remitidos mediante Oficio N.º 00376-2020-UD-OCMA/PJ del 24 de noviembre de 2020, por la jefa de Unidad de Desarrollo del Órgano de Control de la Magistratura.
 - c) Copia de los actuados en los expedientes de los procesos penales N.º 441-2015 y N.º 440-2015
 - d) Copia de los actuados en la investigación preliminar fiscal que se llevó a cabo contra el magistrado investigado por los mismos hechos.

V. DECLARACIONES ACTUADAS

- § Declaración del juez investigado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga¹⁶, realizada el 02 de septiembre de 2021, en plataforma virtual.
12. Con relación al cargo a), en lo fundamental precisó que el representante del Ministerio Público no participó en las declaraciones testimoniales debido a que no era obligatoria su presencia; y, que no tenía mecanismo legal para obligarlo a participar.
13. Con relación al cargo b), sobre el núcleo de la imputación, señaló que los fundamentos para amparar la excepción de naturaleza de acción se referían a que no concurría el elemento de tipicidad subjetiva, procediendo a dar explicaciones sobre los términos de su motivación, según se observa en el video que obra en autos.
14. Además, expuso sobre las circunstancias en que desempeñaba sus funciones en la ciudad de Satipo, de acuerdo con los términos expuestos en su descargo escrito.

¹⁶ Fojas 3938



Junta Nacional de Justicia

§ Declaración testimonial de [REDACTED]¹⁷, realizada el 06 de septiembre de 2021, en plataforma virtual.

15. El testigo manifestó venir desempeñándose como fiscal provincial titular del primer despacho de investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, del distrito fiscal de la Selva Central.
16. Sobre los hechos imputados al juez investigado, los aspectos relevantes de su declaración se refieren a los siguientes aspectos:
 - Refirió haber tomado conocimiento recién en la presente diligencia sobre los elementos de las imputaciones contra el juez investigado, por lo que se encuentra sorprendido de haber sido convocado como testigo.
 - Interrogado por el instructor, explicó sobre los métodos de trabajo en la provincia de Satipo, según aparece en el video que obra en autos; debiendo precisarse que su explicación coincide en lo fundamental con lo expresado por el juez investigado, en cuanto se refiere al trámite para la asistencia del representante del Ministerio Público a las diligencias de declaración testimonial, en los expedientes N.º 440 y N.º 441-2015.

§ Declaración testimonial de [REDACTED]

17. En el expediente se dejó constancia que el testigo no se presentó a la plataforma virtual, pese a haber sido notificado debidamente -a fs. 3942.

VI. INFORME DEL MIEMBRO INSTRUCTOR

18. Mediante el Informe N.º 013-2022-GSTV-JNJ del 18 de marzo de 2022 -fs. 3957 a 3981-, el miembro instructor emitió opinión en el sentido que se diera por concluido el procedimiento disciplinario abreviado seguido al abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga y se le imponga la sanción de destitución.
19. El informe de instrucción fue debidamente notificado al magistrado investigado, habiendo culminado la fase de instrucción, por lo cual se programó la fecha de audiencia de informe oral correspondiente para el 29 de marzo de 2022.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE INFORME DE INSTRUCCIÓN.-

20. Por escrito recibido el 23 de marzo de 2022¹⁸, el juez investigado solicita que el miembro instructor amplíe los términos de su Informe N.º 013-2022-GSTV-JNJ del 18 de marzo de 2022, a fin que se consigne la transcripción de la declaración del

¹⁷ Fojas 3939

¹⁸ Fojas 3991



Junta Nacional de Justicia

testigo principal [REDACTED], que corre a folios 3939, para que sea sometido a consideración del Pleno de la Junta Nacional de Justicia.

21. En este extremo, se considera innecesario ampliar el informe en los términos solicitados por el juez investigado, toda vez que la presente resolución da cuenta del medio de prueba actuado, para lo cual se procede a transcribir la declaración del testigo [REDACTED], en sus aspectos relevantes relacionados con las imputaciones formuladas en el presente procedimiento disciplinario abreviado:

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]: *¿Tiene usted conocimiento, pleno conocimiento, del procedimiento disciplinario seguido contra el señor Chuquillanqui Huaranga?*

[REDACTED]: *Doctor, los detalles no los conozco, los cargos recién los estoy escuchando, pero detalle los cargos en si del proceso solamente tengo conocimiento que el doctor Chuquillanqui, porque la provincia Satipo es pequeña, se encuentra suspendido en sus labores.*

[REDACTED]: *Pero, ¿usted tiene conocimiento de los cargos que se le imputa al señor?*

[REDACTED]: *Recién estoy tomando conocimiento, específicamente no, no tengo, no he leído el expediente no, no.*

[REDACTED]: *Entonces por qué y cómo se presenta usted a dar un testimonio en esta diligencia si no conoce, no digo ya los detalles, sino ni siquiera los cargos formulados contra el señor.*

[REDACTED]: *Doctor, en primer lugar yo también estoy sorprendido de que el doctor Chuquillanqui me haya ofrecido como testigo, soy sincero con ello. En el año 2019 no solamente a mí sino a varios fiscales el doctor Chuquillanqui nos pidió que hagamos una declaración jurada de cómo era el modo de trabajo con el antiguo código de procedimientos penales; en ese sentido es que hice una declaración jurada cómo se trabaja en ese momento no, que era la verdad cómo trabajamos en ese momento, entiendo yo que debe ser por ese motivo y al haber suscrito esa declaración jurada que me encuentro como testigo.*

[REDACTED]: *Podría usted si fuera tan amable elaborar un poco más sobre esos métodos, práctica y temas del sistema de trabajo de aquel entonces.*

[REDACTED]: *Sí, doctor. La provincia de Satipo se caracteriza por ser más del 44 y 46 por ciento de la provincia más grande del departamento de Junín, nosotros como provincia doctor tenemos colindancia con Ucayali, con Cerro de Pasco, Cusco, Ayacucho; y uno de los problemas es que siempre hemos tenido acá y hasta ahora tenemos ese problema que no hay un domicilio cierto y sobre todo cuando son sitios lejanos, entonces en ese sentido cuando había testimoniales en las instructivas, qué pasaba, el juzgado notificaba pero hacía una notificación de audiencia inmediata, es*



Junta Nacional de Justicia

decir que se presentaría al tercer día de notificado, ósea no tenía una fecha cierta, en ese tiempo antes de que se implementara el Código Procesal Penal aquí en Satipo, laborábamos en la fiscalía en ese tiempo yo laboraba en la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Satipo, solamente laborábamos dos fiscales y estábamos de turno un mes y el siguiente mes era post turno y también teníamos una agenda copada, entonces el modo de trabajo era de que cuando estas personas se presentaban, qué hacia el secretario, el secretario nos llamaba por teléfono y nos comunicaba que se había presentado el testigo pero ya muchas veces doctor y eso es en honor a la verdad, muchas veces nuestra agenda ya estaba copada y no podíamos asistir y le indicábamos que no íbamos a participar, pero que bueno en ese tiempo el juez con el código de procedimientos penales el juez era el director de la investigación, ya quedaba en él continuar o no continuar con la diligencia y eso es lo que en fondo yo estoy declarando en honor a la verdad.

■: *Ahora qué tendría usted que decir o explicar digamos sobre las llamadas telefónicas que recibió usted del secretario ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ para que participara en las declaraciones testimoniales de los expedientes 440-2015 y 441-2015.*

■: *Bueno doctor como le vuelvo a repetir ese era una costumbre de trabajo que nos llamara, pero en ese sentido nosotros recibíamos la llamada y de repente podría haber sido yo podría ser otro fiscal no, nos comunicábamos, entonces le indicábamos si eran declaraciones testimoniales de las instrucciones, le indicábamos de que no íbamos a participar; es más, en las actas no consignaban nada de la comunicación, solamente cuando ya venía el expediente para el dictamen no, nosotros consignábamos todas las diligencias que se habían hecho; ahora yo no sé en ese momento el Ministerio Público no dirigía la investigación, todo eso estaba a cargo del juez instructor, entonces era él quien tenía que dar las pautas entonces nosotros solamente nos limitábamos doctor, como le digo, o sea al no haber una fecha cierta, un día y hora cierto, y nosotros tener una agenda ya copada, muchas veces también los distritos acá de Pangoa, Mazamari y Puerto Ocopa están lejanos no podíamos asistir y lo que estamos declarando ahí es que si el secretario nos llamaba, no lo puedo negar, pero muchas veces tampoco participábamos porque no nos encontrábamos de repente en el mismo distrito de Satipo.*

■: *Bien, ahora usted cómo si pudiera pues no cuantificar al detalle pero si pudiera darnos una idea por ejemplo de cuántos casos usted pudo participar en la oportunidad correcta, porque me dice usted que hay problema en la zona, es complicada, lo sé, sobre todo en la época de lluvias, qué porcentaje diría usted o qué idea podría darnos del porcentaje de la parte de estas diligencias que usted fue convocado, usted realmente participó efectivamente.*

■: *Doctor, los problemas o el problema básicamente se establecía en las declaraciones testimoniales, porque en las instructivas generalmente en este delito de tráfico de drogas u otros delitos los denunciados si éramos muy escrupulosos de estar presentes, porque muchas veces estos señores si eran citados con día y hora; ahora las preventivas de los agraviados también éramos muy escrupulosos en participar.*



Junta Nacional de Justicia

■ Si, perdón que lo interrumpa simplemente que usted está en este momento exponiendo, groso modo digamos una idea general de cómo describiría, trataría de cuantificar usted su grado de participación en estos casos.

■ Doctor en realidad poner un porcentaje no sé, o sea no me...

■ Por eso le digo, perdone le interrumpa, no que me dé un porcentaje, por último, poco, mediano o mucho.

■ En la gran mayoría de casos doctor tratábamos de estar presentes, pero como le digo, muchas veces el turno lo hacíamos en un mes y en ese mes no nos daba abasto para...

■ Perdóneme usted, mi pregunta no es esa, la pregunta que le estoy formulando es, en su opinión, cuanto de la participación hubo, poca, mediana, mucha.

■ Yo considero que mucho doctor, porque hemos sacado sentencias muy valiosas.

■ No me refiero a las sentencias sino a la participación en las diligencias.

■ Muchos, en muchos casos doctor.

■ En todas las etapas y en todas las ocasiones, de qué índole.

■ Doctor quiero hacer una aclaración con el antiguo código procedimientos penales con el debido respeto como usted sabe doctor, había dos tipos de procesos los sumarios y ordinarios, entonces en los sumarios nosotros teníamos participación activa y llegamos hasta emitir el dictamen acusatorio y participar en el juicio. En los procesos ordinarios nosotros cumplíamos solamente con participar en las diligencias, llámese itp, diligencias instructivas, testimoniales, preventivas y demás diligencias convocadas, pero terminábamos haciendo el informe correspondiente porque al final el juzgamiento correspondía al fiscal superior y a la sala correspondiente, eso era conforme al antiguo código de procedimientos penales.

■ Y ahora precisar, ya última pregunta este cómo explica usted estas llamadas telefónicas que recibió del señor Rojas Bazán, particularmente en los expedientes 440 y 441 del 2015.

■ Doctor, en realidad muy excepcionalmente de los expedientes que puedan estar consignados ahí, era una forma de trabajo, era una forma consuetudinaria, una práctica que ya se había instaurado, eh eso no lo puedo negar doctor, es en honor a la verdad.

■ Ahora, a usted le parece una práctica de acuerdo al debido proceso y de acuerdo a las normas vigentes en ese momento y en un momento posterior.

■ Doctor, muchas de las normas y esto lo digo con el debido respeto, muchas de las normas a veces son normas de gabinete y no se dan dentro de una realidad territorial y consuetudinaria como es esta provincia Satipo tan grande. En ese sentido yo saludo que usted conozca esta realidad y conozca la provincia y sabe de qué estamos hablando, muchas de las veces y hasta ahorita con este nuevo código



Junta Nacional de Justicia

procesal penal ya nosotros como fiscales tenemos el rol de investigadores, nos damos con la sorpresa que todavía no llegamos a algunas comunidades a algunos lugares, a pesar que tenemos una central de comunicaciones; y en ese tiempo que estamos hablando, 2014 y 2015; antes con el código procedimiento penales, todavía se estaba instaurado una central de notificaciones era muy difícil llegar, entonces si bien es cierto doctor de repente no se cumplía con la norma que es un mandato imperativo, pero se trababa de salvar la situación de diferentes formas, entonces había veces por ejemplo que nosotros solicitábamos al secretario que se vuelva a notificar con fecha y hora ya que la persona estaba presente en ese momento, había otra persona que por su condición no podía regresar, entonces es algo sui generis que pasaba y que a veces ha pasado acá y está pasando, es lo que yo podría decir doctor”.

INCIDENCIA SOBRE EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN.-

- 22.** Por escrito recibido el 24 de marzo de 2022¹⁹, en aplicación supletoria del artículo 6 numeral 1.b) del Código Procesal Penal, el juez investigado deduce excepción de improcedencia de acción respecto del cargo b), invocando los siguientes fundamentos:
- 23.1.** Señala que el instructor en el informe N.º 013-2022-GSTV-JNJ, del 18 de marzo de 2022, concluye que respecto al cargo b) ha realizado motivación aparente al emitir la Resolución N.º 02 del 12 de abril de 2016, por la que amparó una excepción de naturaleza de acción que no correspondía conforme a la legislación vigente; habiéndose subsumido tal imputación en el artículo 48 numeral 13 de la Ley de la Carrera Judicial, que establece como falta muy grave: *“No motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de sus deberes judiciales”*.
- 23.2.** Su pretensión se ampara en el supuesto de que el hecho del cargo b) no constituye falta, toda vez que de conformidad con el principio de legalidad y taxatividad, recogido en el artículo 2 numeral 24 literal d) de la Constitución Política del Perú: *“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena prevista en la ley”*. Precisa, además, que tal principio se prevé en el literal b) del artículo III del Título Preliminar de la Ley Orgánica de la JNJ; en los literales b) y e) de artículo 1 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ; y, en el numeral 4 del artículo 230 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

¹⁹ Fojas 3993 a 4029



Junta Nacional de Justicia

- 23.3.** Indica que la motivación aparente como falta grave ha sido declarada inválida a través del proceso constitucional de Acción Popular, expediente N.° 18107-2016-Lima, del 22 de agosto de 2017.
- 23.4.** De otro lado, manifiesta que el miembro instructor al analizar el cargo b) en el punto 39) de su informe final de instrucción recoge el criterio expuesto por la sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Satipo, la que corresponde a la jurisprudencia no vinculante realizada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en la Casación N.° 407-2015-Tacna, dictada el 07 de julio de 2016; sin embargo, la resolución cuestionada fue expedida el 12 de abril de 2016; es decir, en forma previa, por lo que no se le puede exigir aplicar una jurisprudencia futura.
- 23.5.** Asimismo, precisa que la Casación N.° 407-2015-Tacna es una interpretación del artículo 6 del Código Procesal Penal que prevé la improcedencia de acción, en el marco del sistema procesal penal garantista; mientras que la excepción de naturaleza de acción prevista por el artículo 5 del CdPP corresponde al sistema procesal penal inquisitivo
- 23.6.** En tal sentido, señala que el miembro instructor no ha tenido en consideración que a la fecha no existe uniformidad de criterios respecto a la posibilidad de incorporar valoraciones de tipo probatorio en el examen de procedencia de las excepciones de naturaleza de acción e improcedencia de acción; consecuentemente, concluye que la resolución cuya expedición se cuestiona no contiene una motivación aparente y solo se está proponiendo se le imponga la sanción drástica de destitución por sus criterios jurisdiccionales.
- 23.** Con relación a la excepción propuesta por el juez investigado, previo al análisis de fondo, corresponde precisar que el artículo 22 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia establece de manera taxativa que: *“La persona investigada puede deducir las excepciones de caducidad, de prescripción y de no bis in idem”*; no encontrándose prevista la excepción de improcedencia de acción en el trámite de los procedimientos disciplinarios a cargo de la Junta Nacional de Justicia, los que se tramitan con arreglo al marco normativo que el propio juez investigado invoca.
- 24.** Asimismo, los fundamentos que expone en el escrito del 24 de marzo de 2022 constituyen argumentos sobre el fondo de las imputaciones en su contra, por lo que corresponde que sean incorporadas como parte de su descargo, a fin que sean evaluados en el acápite correspondiente de la presente resolución.



Junta Nacional de Justicia

25. Por los fundamentos previamente expuestos, la excepción de improcedencia de acción que deduce el investigado deviene en improcedente, y no siendo procedente, se consideran sus fundamentos como argumentos de defensa que serán evaluados en la parte pertinente de la presente resolución.

VII. DILIGENCIA DE INFORME ORAL

26. La diligencia de informe oral del investigado se realizó el 29 de marzo de 2022, por medio virtual, ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en cuyo acto expuso sus fundamentos de descargo, señalando lo siguiente:

Sobre el cargo a).-

- 27.1. Que no se ha analizado la declaración del fiscal [REDACTED] que ha confirmado que le avisaron por teléfono de las diligencias en cuestión, dejando expresa constancia de su participación facultativa. Tampoco se habrían considerado las declaraciones de los secretarios, que dan cuenta de haber comunicado a los fiscales por teléfono de las respectivas diligencias.
- 27.2. Considera que deben apreciarse también los dictámenes de los señores fiscales que consideraron las testimoniales y las usaron como medio de prueba, sin tacha alguna. Asimismo, la actuación del Ministerio Público revelaba en los expedientes en cuestión que había tomado conocimiento de las respectivas diligencias. De igual modo estaba convalidada la notificación a testigos con la presencia de estos en las respectivas actuaciones.
- 27.3. Señala la existencia de jurisprudencia vinculante en relación a los actos ulteriores que confirman el conocimiento de las partes, lo que convalida la validez de los actos correspondientes. En tal sentido, destaca que hay convalidación de estos cuando se logra la finalidad y no hay tacha. Destacó, además, que el fiscal no pidió la nulidad. Invocó, además, la aplicación de los principios rectores de la Junta Nacional de Justicia, tales como igualdad y no discriminación, legalidad y verdad material.
- 27.4. No obstante, admite que no ha controlado debidamente la actuación del secretario, respecto de dejar constancia de la comunicación con los fiscales; y agrega que no se ha frustrado ninguna diligencia, y que el pedido destitución es desproporcionado, pues su actuación no ha generado ningún perjuicio.



Junta Nacional de Justicia

Sobre el cargo b).-

- 27.5.** Sostiene que la motivación aparente no significa falta, al no estar tipificada en la ley, pues solo por norma con rango de ley se puede atribuir falta. En caso contrario, se estaría violando la independencia jurisdiccional de los jueces.
- 27.6.** Recuerda que un acuerdo plenario en la Corte Superior de Justicia de Tumbes considera que sí se puede valorar prueba en el caso de la excepción de naturaleza de acción, destacando que no hay uniformidad de criterio al respecto, habiendo jurisprudencia discrepante.
- 27.7.** Concluye señalando que, cuando se declara la nulidad de su resolución, se cita como fundamento una casación que es posterior a su resolución.
- 27.** Asimismo, el investigado respondió a las interrogantes planteadas durante el informe oral, debiendo enfatizarse las respuestas siguientes:
- 28.1.** Al ser preguntado sobre las razones que explican que en los expedientes indicados no se haya notificado debidamente al Ministerio Público, pese a la cercanía física, se limitó a señalar como explicación las recargadas labores en el juzgado. Interrogado sobre el incumplimiento del artículo 139 del CdPP, en lo referente al imperativo de señalar día y hora para la realización de la declaración testimonial, insistió en que la concurrencia del fiscal a las declaraciones de testigos es facultativa. Preguntado si no había el deber de mayor diligencia de su parte, tratándose de procesos penales por tráfico ilícito de drogas, señaló que debía procederse con igual interés en todos los procesos.
- 28.2.** Preguntado en relación al cargo b), sobre si se había planteado el debate doctrinal que invoca en relación a la valoración de prueba en el caso de la excepción de naturaleza de acción, reiteró la existencia de posiciones disímiles sobre el punto, estando ello en el ámbito de autonomía del juez.
- 28.** Los argumentos expuestos se tienen presentes y se evalúan en conjunto con todos los medios de prueba actuados, a fin de arribar a la conclusión correspondiente.
- 29.** Asimismo, por escrito del 29 de marzo de 2022, el juez investigado reiteró los argumentos con los que sustentó las articulaciones de defensa formuladas, así como los que considera que le eximen de responsabilidad disciplinaria.



Junta Nacional de Justicia

VIII. ANÁLISIS DE LAS IMPUTACIONES

§ Sobre el cargo a).-

“Haber recabado declaraciones testimoniales en los expedientes de los procesos penales Nros. 441-2015 y 440-2015, sin notificar debidamente a los testigos y al representante del Ministerio Público, lo cual originó que dichas diligencias se llevarán a cabo sin la presencia del representante del Ministerio Público.

Con la conducta atribuida el magistrado habría presuntamente inobservado el deber previsto en el artículo 34° numeral 1) de la Ley de Carrera Judicial – Ley N.° 29277, concordante con el principio de la función jurisdiccional preceptuado en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política; incurriendo en la comisión de la falta muy grave tipificada en el artículo 48° numeral 13) de la invocada Ley de Carrera Judicial”.

30. Como punto de partida, resulta de singular importancia tener presente el marco normativo que corresponde a la actuación de los representantes del Ministerio Público en los procesos penales que se encuentran en liquidación, por tanto sujetos a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales (CdPP) y normas conexas.
31. Así, se observa que si bien el artículo 91 del CdPP señala: *“A todas las diligencias de la instrucción deberá citarse al Ministerio Público, pero su concurrencia es facultativa. [...]”*; dicha norma fue modificada de conformidad con la disposición contenida en el artículo 107 del Decreto Legislativo N.° 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala textualmente: *“Modifícase el Código de Procedimientos Penales en su[s] artículo[s] 91, en cuanto declara facultativa la concurrencia del Ministerio Público a las diligencias judiciales, la que es obligatoria; [...]”*.
32. Esta disposición modificatoria guarda coherencia con la importancia de la concurrencia del representante del Ministerio Público a las diligencias judiciales, en los términos previstos por los artículos 62 y 72 del CdPP, que señalan lo siguiente:

“Artículo 62.- *La investigación policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio Público, constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad, por los Jueces y Tribunales, conforme a lo dispuesto en el artículo 283 del Código.”*

(Según modificatoria del artículo 1 del Decreto Legislativo N.° 126, publicado el 15 junio 1981)



Junta Nacional de Justicia

“Artículo 72.- Objeto de la instrucción

[...]

3. Las diligencias actuadas en la etapa policial con la intervención del Ministerio Público y las practicadas por el propio Fiscal Provincial, con asistencia del defensor, que no fueran cuestionadas, mantendrán su valor probatorio para los efectos del juzgamiento. [...].”

(Según modificatoria del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 1206, publicado el 23 de septiembre de 2015)

33. Asimismo, el artículo 139 del CdPP señala textualmente que: *“El juez señalará día y hora para la comparecencia del testigo, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza”*. Es decir, además de la obligatoriedad de la presencia del representante del Ministerio Público en las diligencias judiciales, constituye deber del juez señalar de manera precisa la fecha y hora para la actuación de la declaración del testigo.
34. Teniendo en consideración este marco normativo, corresponde evaluar las infracciones que se imputan al abogado Chuquillanqui Huaranga, en cada uno de los actos que se precisan en el expediente que sustentan el pedido de destitución.
35. En el trámite del expediente N.º 441-2015:

35.1. Mediante escrito recibido el 09 de noviembre de 2015, la parte imputada solicitó al Juzgado Penal Liquidador de Satipo la actuación de diligencias, entre éstas, la declaración de testigos. Dicho escrito fue proveído mediante Resolución N.º 18 del 13 de noviembre de 2015, **suscrita por el juez investigado**, donde se dispuso la toma de declaraciones testimoniales ofrecidas de [REDACTED] y [REDACTED]. Esta resolución fue notificada al representante del Ministerio Público el 16 de noviembre de 2015 a las 12:45 horas, conforme al cargo que obra a fs. 714. Y a fs. 725 y 726 obra la declaración testimonial de [REDACTED], recibida a las 11:30 horas del 16 de noviembre de 2015; y, a fs. 728 y 729, obra la declaración testimonial de [REDACTED], recibida a las 11:00 horas del 16 de noviembre de 2015, en las cuales **no se advierte la presencia del representante del Ministerio Público**.

El juez investigado precisa en este extremo que se coordinó con el Fiscal [REDACTED], en la lógica que su presencia en la diligencia era facultativa, lo que no resulta acorde con el marco normativo que regula la actuación fiscal en las diligencias judiciales en el marco del CdPP.

35.2. El 16 de noviembre de 2015, la parte imputada solicitó al Juzgado Penal Liquidador de Satipo la actuación de la declaración testimonial de [REDACTED] [REDACTED]; escrito que fue proveído mediante Resolución N.º 19²⁰ del 16

²⁰ Fojas 732



Junta Nacional de Justicia

de noviembre de 2015, **suscrita por el juez investigado**, donde se dispuso la actuación de dicha declaración testimonial. Dicha resolución fue notificada al representante del Ministerio Público a las 14:30 horas del 27 de noviembre de 2015, conforme al cargo que obra a fs. 738. Al respecto, a fs. 751 y 752 obra la declaración testimonial de [REDACTED], recibida el 26 de noviembre de 2015, en la cual **no se advierte la presencia del representante del Ministerio Público**.

En este caso, la explicación que brinda el juez investigado es similar a la descrita en el numeral anterior.

- 35.3.** Mediante escrito del 05 de enero de 2016, la parte imputada solicitó al Juzgado Penal Liquidador de Satipo la actuación de las declaraciones testimoniales de [REDACTED] y [REDACTED]; escrito que fue proveído mediante Resolución N.º 29²¹ del 05 de enero de 2016, **suscrito por el juez investigado**, donde se dispone la actuación de dichas declaraciones testimoniales.

En este extremo, conforme a lo señalado por el juez investigado en su descargo, se verifica que el fiscal fue notificado el día 08 de enero de 2016 a las 09:20 horas -fs. 511-512 del primer cuaderno cautelar-. No obstante, en las declaraciones testimoniales **no se advierte la presencia del representante del Ministerio Público**.

- 36.** En el trámite del expediente N.º 440-2015:

- 36.1.** El 11 de agosto de 2015, la parte imputada solicitó al Juzgado Penal Liquidador de Satipo, las declaraciones de los testigos [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], escrito que fue proveído mediante Resolución N.º 09²² del 13 de agosto de 2015, **suscrita por el juez investigado**, donde se dispuso la actuación de las referidas declaraciones testimoniales. Dicha resolución fue notificada al representante del Ministerio Público el 18 de agosto de 2015, conforme al cargo que obra a fs. 1650. Y a fs. 1654 y 1655 obra la declaración testimonial de [REDACTED], recibida a las 15:00 horas del 24 de agosto de 2015; a fs. 1660 y 1661 obra la declaración testimonial de [REDACTED], recibida a las 11:15 horas del 31 de agosto de 2015; a fs. 1662 y 1663 obra la declaración testimonial de [REDACTED], recibida a las 09:00 horas del 31 de agosto de 2015, en cuyas

²¹ Fojas 877

²² Fojas 1646



Junta Nacional de Justicia

declaraciones **no se advierte la presencia del representante del Ministerio Público.**

El juez investigado precisa en este extremo que se coordinó telefónicamente con el fiscal [REDACTED] quien informó que no participaría, en la lógica que su presencia en la diligencia era facultativa, lo que no resulta acorde con el marco normativo que regula la actuación fiscal en las diligencias judiciales en el marco del CdPP.

- 36.2.** Mediante escrito del 15 de setiembre de 2015, la parte imputada solicitó al Juzgado Penal Liquidador de Satipo la declaración de la testigo [REDACTED]; escrito que fue proveído mediante Resolución N.º 18 del 16 de setiembre de 2015, **suscrita por el juez investigado**, donde se dispone la actuación de dicha declaración testimonial. Dicha resolución fue notificada al representante del Ministerio Público el 18 de setiembre de 2015, conforme al cargo que obra a fs. 1711. Y de fojas 1737 a 1741 obra la declaración testimonial de [REDACTED], recibida a las 11:00 horas del 28 de setiembre de 2015, declaración en la cual **no se advierte la presencia del representante del Ministerio Público.**

En este caso, la explicación que brinda el juez investigado es similar a la descrita en el numeral anterior.

- 36.3.** El 21 de septiembre de 2015 la parte imputada solicita al Juzgado Penal Liquidador de Satipo la declaración de la testigo [REDACTED]; escrito que fue proveído mediante Resolución N.º 19²³ del 23 de septiembre de 2015, **suscrita por el juez investigado**, donde se dispone la actuación de la declaración testimonial. Dicha resolución fue notificada al representante del Ministerio Público el 12 de octubre de 2015 a las 15:52 horas, conforme al cargo que obra a fs. 1727. Y de fs. 1743 a 1745 obra la declaración testimonial de [REDACTED], recibida a las 16:00 horas del 02 de octubre de 2015, declaración en la cual **no se advierte la presencia del representante del Ministerio Público.**

En este extremo, el juez investigado precisa que la notificación al fiscal se realizó el mismo día y minutos antes de recibirse la testimonial; habiéndose coordinado telefónicamente con el fiscal, quien manifestó que no participaría.

²³ Fojas 1724



Junta Nacional de Justicia

36.4. Mediante escrito del 24 de septiembre de 2015, la parte imputada solicita al Juzgado Penal Liquidador de Satipo, la declaración del testigo [REDACTED] escrito que fue proveído mediante Resolución N.º 20²⁴ del 28 de septiembre de 2015, **suscrita por el juez investigado**, donde se dispone la actuación de la declaración testimonial. Y dicha resolución fue notificada al representante del Ministerio Público el 12 de octubre de 2015 a las 15:51 horas, conforme al cargo que obra a fs. 1732. Y a fs. 1757 y 1758 obra la declaración testimonial de [REDACTED], recibida a las 14:00 horas del 12 de octubre de 2015, declaración en la cual **no se advierte la presencia del representante del Ministerio Público**.

En este caso, el juez investigado precisa que la notificación al fiscal se realizó el mismo día, después de recibirse la testimonial, habiéndose coordinado telefónicamente con el fiscal, quien manifestó que no participaría.

36.5. El 11 de diciembre de 2015, la parte imputada solicita al Juzgado Penal Liquidador de Satipo, la declaración de la testigo [REDACTED] escrito que fue proveído mediante Resolución N.º 29²⁵ del 15 de diciembre de 2015, **suscrita por el juez investigado**, donde se dispone la actuación de la declaración testimonial, no advirtiéndose notificación al representante del Ministerio Público. A fojas 1941 y 1942, obra la declaración testimonial de [REDACTED] recibida a las 16:32 horas del 20 de enero de 2016, declaración en la cual **no se advierte la presencia del representante del Ministerio Público**.

En este extremo, el juez investigado reconoce que fue la única notificación física que no se le entregó al señor fiscal, pero se le comunicó por teléfono antes de la diligencia.

37. De la descripción de los trámites antes indicados, se advierte que el juez investigado desconoció las disposiciones normativas que regulan su actuación para los fines de las declaraciones testimoniales citadas, es decir, no verificó que previamente se haya cumplido con notificar con las formalidades de Ley al representante del Ministerio Público; por lo que en el caso de los testigos [REDACTED] y [REDACTED] dicha notificación se efectuó con fecha posterior a la de la diligencia; y en el caso de la testigo [REDACTED], nunca se efectuó tal notificación.

²⁴ Fojas 1731

²⁵ Fojas 1905



Junta Nacional de Justicia

38. Cabe precisar que el hecho que en el caso de las declaraciones de los testigos [REDACTED], [REDACTED] sí se haya notificado al representante del Ministerio Público, ello no justifica que en todos los demás casos no se haya consignado en acta las circunstancias relativas a la presencia de dicho representante.
39. Resulta importante destacar que el incumplimiento del artículo 139 del CdPP, en lo referente al señalamiento de día y hora para la realización de la declaración testimonial, que con carácter mandatorio prevé la ley, constituye un agravante al constituir una disposición que permite que el representante del Ministerio Público pueda realizar las coordinaciones de agenda necesarias para su concurrencia; siendo las coordinaciones telefónicas insuficientes para dar cumplimiento al mandato legal expreso del CdPP.
40. Además, la declaración testimonial del fiscal provincial [REDACTED] no hace más que acentuar la irregularidad en los trámites antes señalados, que se pretende justificar en una práctica establecida en la zona donde ejercían sus funciones, la que no se ajusta al marco normativo que regula las mismas.
41. En tal sentido, las omisiones denotadas no tienen justificación alguna, pues si bien no es obligación del juez realizar las notificaciones, ni este puede garantizar la presencia física del fiscal en las declaraciones testimoniales, sí constituye su deber funcional revisar los actuados correspondientes y verificar, antes de la realización de cualquier diligencia, la notificación a todas las partes procesales a fin de cautelar el derecho a la defensa y el debido proceso, así como evitar futuras nulidades, lo que evidentemente no fue tenido en cuenta por el investigado en estos casos.
42. La inobservancia de este mandato legal de parte del investigado hizo que el Ministerio Público no pudiera ejercer su función en las declaraciones testimoniales, quedando el titular de la acción penal en estado de indefensión y la declaración del testigo a su libre albedrío, sin control del persecutor penal, lo que desnaturaliza el sentido de la prueba testimonial en el proceso penal.
43. Asimismo, resulta importante contextualizar los procesos en los que se produjeron las irregularidades anotadas; advirtiéndose que en ellos hay cuestionamientos relacionados a delitos contra la Salud Pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado peruano. En este sentido, estamos frente a delitos que tienen un alto impacto en la ciudadanía, el estado de derecho, en la economía y en el medio ambiente, debiendo destacarse los estudios que realizan investigadores especializados sobre el tema como Ruda y Novak, en los que señalan que este delito constituye una amenaza a la seguridad nacional y global de los Estados, en tanto concurren los dos elementos para entender que ella se configura: *“de un lado, la voluntad de las mafias y los cárteles de la droga de causar un daño a los Estados*



Junta Nacional de Justicia

para facilitar sus actividades ilícitas, y, de otro, la gran capacidad de movilización de recursos materiales y humanos con que cuentan estos grupos delictivos”²⁶.

44. En este contexto, resulta claro que los jueces deben actuar con estricto apego a sus obligaciones, evitando conductas negligentes que perjudican el proceso; máxime si el investigado invoca circunstancias que no se arreglan a ley, como señalar que la concurrencia del representante del Ministerio Público es facultativa: La circunstancia de la inasistencia del fiscal como costumbre, la carencia de dirección domiciliaria del testigo, la carencia de notificador, o la presencia inmediata del testigo como expresa el investigado en sus descargos y en el informe oral, como motivo para la toma de las declaraciones testimoniales sin su presencia, **no es justificación legal válida** para no cumplir las normas mencionadas. Tampoco exime de responsabilidad al investigado el argumento de la ausencia de nulidad de tales actuaciones, por su posterior convalidación por acciones ulteriores del Ministerio Público. Si bien no se causó un daño irreversible en los procesos bajo análisis, se puso en riesgo innecesariamente la validez de los actos en cuestión, máxime si no había impedimento alguno de distancia, o de cualquier otra índole, que explique la ausencia de notificación al Ministerio Público. En el presente caso, había la obligación de notificar de manera oportuna con datos ciertos de día y hora al titular de la acción penal, respecto de la realización de la diligencia de declaraciones testimoniales.

§Sobre el cargo b).-

Haber vulnerado el deber de observar el debido proceso en su expresión de la motivación de las resoluciones, al emitir la resolución N.º 02 de fecha 12 de abril de 2016, en el expediente N.º 440-2015-70, que amparó una excepción de naturaleza de acción.

Con la conducta imputada al magistrado habría presuntamente inobservado el deber previsto en el artículo 34º numeral 1) de la Ley de Carrera Judicial – Ley N.º 29277, concordante con el principio de la función jurisdiccional preceptuado en el artículo 139º inciso 5 de la Constitución Política; incurriendo en la comisión de la falta muy grave tipificada en el artículo 48º numeral 13) de la invocada Ley de Carrera Judicial.

45. El 11 de enero de 2016, el imputado [REDACTED] dedujo la **excepción de naturaleza de acción** en el proceso penal seguido en su contra por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en agravio del Estado -fs. 2066 a 2084-. En atención a ello, el 12 de abril de 2016 el magistrado investigado expidió la resolución N.º 02 -fs. 2086 a 2090-, por la cual **declaró fundada la excepción** propuesta,

²⁶ RUDA, Juan José y Fabián NOBAK, “El tráfico ilícito de drogas en el Perú: una aproximación internacional”. En: El Mapa del narcotráfico en el Perú, Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP. Archivo electrónico recuperado de: https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/39934/1_aproximacion.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Junta Nacional de Justicia

disponiendo que consentida o ejecutoriada que fuera la misma se archive ese extremo de la causa.

46. Esta decisión fue apelada y subió a la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Satipo; en cuya sede por Resolución N.º 41 del 21 de diciembre de 2016, la declaró nula, disponiendo que se remitan copias a ODECMA, por existir indicios de irregularidad.
47. De acuerdo con lo expuesto por el juez investigado en su descargo, los fundamentos centrales por los que declaró fundada la excepción de naturaleza de acción se encuentran en los considerandos cuarto y quinto, que según precisa analizan el caso concreto para determinar si efectivamente concurre o no el elemento de tipicidad subjetiva -dolo- en el delito que se atribuye al excepcionante (cuestiones analíticas de fundabilidad o no).
48. En tal sentido, corresponde tener presente tal fundamentación que se transcribe a continuación:

*“**CUARTO.-** Que, analizado los autos se advierte la inexistencia de los elementos típicos de la conducta, típica, antijurídica y culpable, ya que el recurrente no ha llegado tener el dominio del hecho, en el evento que se le llega a incriminar, ya que la única sindicación primigeniamente provino de su coprocesado [REDACTED] quien refirió que había sido contratado por éste para el transporte de la droga, sin recibir dinero previo alguno pero que sin embargo el procesado [REDACTED] corrió con los gastos para acondicionar las caletas en el vehículo que según refiere usaba para el transporte público, empero conforme al desarrollo del proceso y los medios de prueba actuados este procesado entró en serias contradicciones y la declaración uniforme tanto a nivel preliminar y judicial del procesado [REDACTED] fue corroborada con la declaración testimonial de la **testigo** [REDACTED] (fs. 290/291), quien refiere que conoció a [REDACTED] el día catorce de junio del dos mil quince, a las cinco de la tarde cuando llegó a su pequeño hospedaje y se alojó ese día hasta el día siguiente retirándose a las nueve o nueve y treinta de la mañana; por su parte el testigo [REDACTED] (fs. 293/294), refiere que a [REDACTED] lo conoció el día catorce de junio del dos mil quince, después de las seis de la tarde, aproximadamente, cuando se encontraba en Puerto Chata porque se lo presenta la señora [REDACTED], diciéndole que se dedica a la compra y venta de granos, llegando a conversar, aproximadamente, veinte minutos; consecuentemente, la versión del inculpado [REDACTED] de que se encontraba el día catorce y quince de junio en Puerto Ocopa adquiere verosimilitud contradiciendo lo vertido por su coincepado [REDACTED] de otro lado, también se advierte de la **inspección judicial** (fs. 295/299) practicada en el lugar de la intervención y el lugar donde supuestamente el inculpado [REDACTED] habría abordado el vehículo que venía conduciendo su coincepado [REDACTED] esto es, por cercanías del [REDACTED], ubicado en Mazamari; se recibió la declaración testimonial in sito de [REDACTED] (fs. 342/344), quien refiere que el día quince de junio del dos mil quince se encontraba atendiendo a sus comensales en su negocio ubicado frente al Grifo Ortega y en esa circunstancia ingresó a su tienda el inculpado [REDACTED] para comprar una gaseosa y una galleta pagándole con un billete de cien nuevos soles; lo cual motivó que se molestara porque tuvo que ir a buscar sencillo para el vuelto; además, agrega que pudo ver que el inculpado [REDACTED] abordó un*



Junta Nacional de Justicia

vehículo color oscuro que venía con dirección de Pangoa a Mazamari. Este testimonio corrobora la versión del inculcado [REDACTED] por último, también corre en autos la testimonial de [REDACTED] (fs.306/307), quien refiere, tener un lavadero de carros ubicado frente al colegio San Martín de Pangoa y que el día quince de junio del dos mil quince de doce y media a una de la tarde aproximadamente ingresó a su lavadero el inculcado [REDACTED] pidiéndole que lave su vehículo por fuera y por haber malogrado las plumillas del parabrisas tuvo un altercado con él y que en todo ese momento se encontraba solo; por último, también, se advierte que llevado a cabo la **audiencia de confrontación entre los inculcados** [REDACTED] (fs.442/443), este último inculcado se retractó respecto del punto controvertido de que su coincepado [REDACTED] lo habría contratado para que transporte droga; asimismo, no supo explicar el por qué pudo haberlo llamado su coincepado el día quince de junio del dos mil quince si ese día estuvieron viajando juntos desde Pangoa hasta el lugar donde se produjo la intervención policial, lo cual resulta totalmente ilógico puesto que si estaban viajando juntos por qué se tendrían que comunicar por teléfono; consecuentemente, esta versión no resulta creíble e incluso ha referido en la diligencia de inspección judicial, que en un primer momento se había parado con el vehículo que trasladaba por un lavadero de carro por el distrito de Mazamari, posteriormente rectificándose dijo en San Martín de Pangoa, hechos que demuestran que no guarda relación con la imputación objetiva del tipo penal, que se viene incriminar al procesado [REDACTED] **QUINTO.-** Que de la norma penal glosada se desprende que ninguno de los actos realizados por el excepcionante, constituye el delito de tráfico ilícito de drogas por cuanto no ha llegado a tener dominio del evento delictivo, resumiéndose su participación a un hecho circunstancial con el desarrollo de una conducta no delictiva ya que solo ha abordado por un breve tiempo el vehículo intervenido, sin haber conocido de la existencia de los estupefacientes en el vehículo.”

49. Con relación a la resolución cuestionada, el juez investigado en su descargo señala que sí tiene motivación, pero que a su criterio es insuficiente; además, refiere que ya existe pronunciamiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el sentido que estamos ante un caso de motivación aparente que no constituye falta de motivación.
50. Al respecto, corresponde precisar que en el presente procedimiento disciplinario abreviado se imputa al investigado haber vulnerado su deber judicial de impartir justicia con respeto al debido proceso, con énfasis en su manifestación de la debida motivación, en concordancia con el artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política del Perú, que prevé como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional el de la “motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”.
51. En tal sentido, esta Junta Nacional de Justicia no evalúa la motivación aparente que invoca el investigado, sino el cumplimiento o no de deberes judiciales, conforme se ha señalado previamente.
52. En este sentido, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado precisando el debate en torno al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al señalar en la STC - EXP. N.º 03433-2013-PA/TC, del 18 de marzo de 2014, lo siguiente;



Junta Nacional de Justicia

“4). Sobre la presunta vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

[...]

4.4.2) *Este Supremo Colegiado precisando el contenido del derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ha establecido que éste “(...) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengán planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (...) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC N° 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).*

4.4.3) *El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.*

4.4.4) *A mayor abundamiento, este Tribunal, en distintos pronunciamientos, ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”.*

53. Bajo este marco, corresponde verificar que la conducta incurrida por el juez investigado se encuentre de los alcances que le corresponden resolver en el caso concreto de la excepción de naturaleza de acción sometida a su conocimiento.

54. El artículo 5 del CdPP establece que: “*Contra la Acción Penal puede[n] deducirse la[s] Excepción[es] de Naturaleza de Acción, [...] cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente*”. Esto significa que el juez investigado estaba en la obligación de fundamentar alguno de estos dos extremos para resolver dentro del marco legal la excepción planteada por el imputado [REDACTED].

55. Siendo esto así, resulta claro que el elemento central que expone el juez investigado para declarar fundada la excepción de naturaleza de acción se refiere a que el imputado [REDACTED] no ha tenido dominio del evento delictivo, toda vez que circunstancialmente estuvo en el vehículo intervenido sin conocer la existencia de estupefacientes en el mismo.

56. Sin embargo, no se advierte que se haya realizado el análisis respecto del tipo del delito materia del proceso penal sometido a su conocimiento, que resultaba ser el



Junta Nacional de Justicia

previsto por los artículos 296 y 297 numeral 7) del Código Penal, referidos a la promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y sus formas agravadas, a fin de determinar por qué, en su criterio, la conducta atribuida al solicitante no se encontraba dentro de los alcances de las normas citadas.

57. Por el contrario, se advierte que el juez investigado realizó una valoración del material probatorio para definir los hechos y efectuar un juicio de mérito del fondo del asunto, con base en el argumento que el solicitante no tenía el dominio del evento delictivo, debido a que desconocía de la existencia de los estupefacientes en el vehículo; siendo tal pronunciamiento uno sobre la esfera del juicio de responsabilidad penal, se ha visto alterado el debate procesal, siendo incongruente con la definición del artículo 5 del CdPP sobre la excepción de naturaleza de acción.
58. La conducta así denotada por el juez investigado, revela que, sin atender al carácter jurídico de la excepción de naturaleza de acción, ha pretendido justificar y amparar una decisión que sustrae al procesado de la acción de la justicia, vulnerando el deber de impartir justicia con respeto al debido proceso, específicamente en su manifestación de la motivación de las resoluciones, conducta que constituye falta muy grave.
59. Se debe reiterar el hecho que la evaluación que realiza la Junta Nacional de Justicia no se refiere al cuestionamiento del criterio que esboza el juez investigado en la resolución cuestionada, de manera que no se afecta su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, la misma que debe precisarse encuentra sus límites en la Constitución y la Ley, debiendo respetar en forma irrestricta sus deberes judiciales en todos los casos que son sometidos a su conocimiento.
60. De otro lado, atendiendo a los argumentos expuestos por el juez investigado en el escrito presentado el 24 de marzo de 2022, específicamente los glosados en los considerandos 23.4, 23.5 y 23.6 de la presente resolución; debe advertirse que el debate jurisprudencial que alude en sus fundamentos se refiere a la *“falta de uniformidad de criterios respecto a la posibilidad de incorporar valoraciones de tipo probatorio en el examen de procedencia de las excepciones de naturaleza de acción e improcedencia de acción”*, cuestión sobre la cual abunda en su informe oral.
61. Sin perjuicio del debate jurisprudencial que se invoca; ello no desnaturaliza el carácter jurídico de la excepción de naturaleza de acción, establecida por el artículo 5 del CdPP, que ya se ha mencionado previamente, el que es materia del presente procedimiento disciplinario abreviado. Es decir, no se cuestiona su criterio jurisdiccional sobre el particular, ni la circunstancia que haya valorado elementos probatorios en el análisis de la excepción; sino el hecho que los fundamentos centrales de su decisión, que se transcriben en el considerando 48 de la presente



Junta Nacional de Justicia

resolución, no revelan el análisis del tipo relativo al delito instruido (tráfico ilícito de drogas y sus formas agravadas) a partir del cual se pueda verificar con claridad que el hecho denunciado **no constituye delito o no es justiciable penalmente**.

62. En efecto, el análisis externo que es posible hacer de la resolución en comento, evidencia que no se explicita el proceso mental a partir del cual el investigado establece si los hechos atribuidos al encausado constituyen o no delito, esto es si la conducta descrita en la apertura de instrucción corresponde con aquella prescrita en la ley penal. Tampoco se halla análisis alguno en relación a si los mismos hechos atribuidos al imputado son o no justiciables penalmente. El magistrado investigado no formula una reflexión **a partir de los hechos imputados** para contrastarlos con el tipo penal, sino que **lo hace desde un estadio posterior a la imputación**, el de su propia calificación de la conducta del imputado, tras valorar las declaraciones del coprocesado, testimonios actuados y demás elementos probatorios.
63. De esta forma, de acuerdo con los fundamentos expuestos se llega a la convicción que el juez investigado expidió la Resolución N.º 02 del 12 de abril de 2016, en el Expediente N.º 440-2015, incurriendo en vulneración del debido proceso en su manifestación de la motivación de resoluciones judiciales, conforme a la legislación vigente, siendo pasible de sanción disciplinaria.

CONCLUSIONES.-

64. En el presente procedimiento disciplinario abreviado ha quedado acreditado que el juez investigado no realizó las notificaciones de manera oportuna al representante del Ministerio Público a efectos de la toma de testimoniales en los procesos penales a su cargo.
65. De acuerdo con los fundamentos expuestos previamente, la falta de diligenciamiento de las notificaciones al representante del Ministerio Público puso en riesgo los procesos penales, en la medida que impidió el ejercicio de control y defensa de los intereses legítimos del Estado en delitos como los procesados, de alto impacto para la sociedad y el Estado.
66. Por su parte, respecto de la resolución que dispuso admitir la solicitud de excepción y archivo del proceso penal, es importante recordar que la debida motivación de resoluciones constituye una garantía a la tutela jurisdiccional efectiva, siendo este un tema que ha sido materia de reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la que resulta aplicable para los fines de establecer las faltas por vulneración al debido proceso en su expresión de la motivación de las resoluciones.
67. En tal sentido, es pertinente enfatizar lo señalado en la STC - Exp. N° 08439-2013-PHC/TC del 20 de noviembre de 2014:



Junta Nacional de Justicia

“El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y sus alcances.

- 7) *Este Tribunal ha dejado establecido, a través de su jurisprudencia (Exp. N° 1480-2006-PA/TC), que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.”*
 - 8) *En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha hecho especial hincapié en el mismo proceso que “(...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo, donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.*
 - 9) *Por lo mismo y como también ha quedado explicitado en posteriores casos (Exp. N° 0728-2008-PHC/TC), el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales”.*
68. Consecuentemente, la Resolución N.º 02, glosada en el considerando 48 de la presente resolución, revela que, si bien el magistrado investigado expuso argumentos para justificar su decisión, estos se han expresado vulnerando el derecho a la debida motivación, pues no guardan relación con la cuestión que en esa excepción debía dilucidarse: si los hechos denunciados eran constitutivos de delito o eran justiciables penalmente. De esta forma se ha afectado principios esenciales de la función de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso previstos en los numerales 1 y 3 del artículo 139 de la Constitución Política.



Junta Nacional de Justicia

69. En definitiva, este colegiado arriba a la convicción que el investigado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, con las conductas incurridas, ha inobservado su deber previsto en el artículo 34 numeral 1) de la Ley de Carrera Judicial – Ley N.º 29277, en lo referente al impartir justicia con respeto al debido proceso, concordante con el principio de la función jurisdiccional preceptuado en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política; incurriendo en la comisión de la falta muy grave tipificada en el artículo 48 numeral 13) de la Ley de Carrera Judicial, en sus dos extremos relativos a no motivar las resoluciones judiciales e inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales.

VIII. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

70. A fin de determinar la graduación de la responsabilidad disciplinaria incurrida por el juez investigado que conlleve a imponer la sanción de mayor gravedad, cual es la destitución, en el marco de las competencias que la Constitución Política ha otorgado a la Junta Nacional de Justicia, se debe tener en consideración que la función de control disciplinario debe estar revestida del análisis objetivo de los hechos, evitando criterios subjetivos que no estén respaldados en la valoración de medios de prueba suficientes que manifiesten conductas concretas, que denoten la comisión de hechos que puedan ser pasibles de sanción.
71. Al momento de determinar la sanción se deberá tener presente que la medida disciplinaria a adoptarse en el proceso resulte adecuada para conseguir el fin del proceso administrativo sancionador, consistente en investigar, verificar y sancionar una conducta señalada expresamente en la ley como supuesto de responsabilidad y de esta manera salvaguardar el bien jurídico que se quiere proteger (garantizar la dignidad y la respetabilidad del cargo), y si esta merece la medida disciplinaria de mayor drasticidad.
72. La proporcionalidad de la infracción con la sanción debe evaluarse pues a la luz del **nivel del magistrado** a quien se imputa, que en este caso es un juez titular, quien se desempeñaba como juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, cuya relevancia es indiscutible dentro del sistema judicial, pero que, además, implica el deber de conocer y apreciar debidamente sus deberes funcionales, en especial aquellos vinculados al respeto al debido proceso, cuanto más en lo referente a la motivación de resoluciones judiciales, siendo que esta última en particular es la forma en que se legitima ante la ciudadanía.
73. En lo que atañe a su **grado de participación** en la comisión de la infracción, en mérito a la prueba actuada, se aprecia plena conciencia en el desarrollo de cada una de las conductas imputadas; distorsionando el desempeño de su función



Junta Nacional de Justicia

jurisdiccional. Por ende, tuvo una participación directa y determinante en los hechos materia de imputación.

74. Sobre la **perturbación al servicio judicial**, se ha demostrado que el investigado actuó indebidamente. Vulneró sus deberes judiciales de impartir justicia con respeto al debido proceso. Si bien, en relación al cargo a) la perturbación al servicio judicial no tuvo el grado más alto de intensidad, dado que no se dedujeron nulidades como consecuencia de la tardanza y/o ausencia de notificaciones, sí se normalizó una situación irregular contraria a ley, que impacta negativamente en el servicio judicial.

En relación al cargo b) la perturbación cobró mucho mayor intensidad, no solo por la gravedad del delito en torno del cual se produce la infracción disciplinaria, sino por la desnaturalización que opera el investigado respecto de la excepción de naturaleza de acción, como ha sido analizado en los considerandos 45 a 63 de la presente resolución.

75. Respecto a la **trascendencia social o el perjuicio causado**, se aprecia que con su conducta el juez investigado ha inobservado flagrantemente sus deberes judiciales, impactando negativamente en la percepción del sistema judicial en su conjunto.
76. Respecto del **grado de culpabilidad** del juez investigado, puede concluirse fuera de toda duda razonable que tenía plena conciencia de sus actos constitutivos de inconducta funcional, admitiendo los hechos en el cargo a), aunque justificándolos a partir de supuestas prácticas normalizadas en la jurisdicción. De igual forma, en el cargo b), se advierte culpabilidad del investigado, al omitir la motivación que le era exigible, evidenciando, cuando menos, una conducta negligente, respecto de sus obligaciones.
77. Sobre el **motivo determinante** de su comportamiento no se encuentra ninguna circunstancia susceptible de ser considerada para una eventual atenuación de su responsabilidad.
78. En cuanto al **cuidado empleado** en la preparación de la infracción tampoco se puede considerar que el suyo fue un comportamiento casual y errático, sino que, por el contrario, en el cargo a) supuso acciones reiteradas que muestran una postura razonada que persistió en la conducta infractora. En el cargo b) tampoco se puede atribuir su conducta a un mero descuido, dada la gravedad del delito de tráfico ilícito de drogas sobre el que debía pronunciarse, circunstancia que le exigía la mayor prolijidad en la motivación de sus decisiones.



Junta Nacional de Justicia

79. Finalmente, respecto de la posible existencia de **situaciones personales** que podrían aminorar la capacidad de autodeterminación del investigado, no hay ninguna que haya sido invocada por la defensa o que pueda advertirse en el expediente.
80. Asimismo, efectuado el test de proporcionalidad o ponderación, el cual, según lo establecido por el Tribunal Constitucional, incluye, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, se advierte que:
- a) Análisis de Idoneidad. La Ley de la Carrera Judicial considera como falta muy grave: “No motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales”; siendo que en el presente caso se han verificado ambos supuestos, por lo que, la sanción de destitución a imponerse al investigado al haberse acreditado las imputaciones correspondientes a los cargos a) y b), afecta sin duda alguna al buen funcionamiento de la administración de justicia; de manera que, constituye en efecto una medida idónea que el derecho disciplinario judicial adopta al considerar como infracciones muy graves aquellas conductas que lesionen el buen funcionamiento de la administración de justicia y la credibilidad que sustenta un sistema judicial imparcial, como garantía objetiva de la función jurisdiccional y como derecho subjetivo de los justiciables.
 - b) Análisis de necesidad. El investigado Edgard Jesús Chuiquillanqui Huaranga, quien venía ejerciendo la magistratura en su calidad de juez titular, tenía la obligación de conocer los deberes exigidos y prohibiciones previstas en el ejercicio de su función, que delimitan la actuación de los jueces pertenecientes al sistema de justicia. Su participación en los hechos acreditados hace que la medida de sanción impuesta sea una medida necesaria para garantizar que la afectación producida al servicio judicial y su transcendencia en el ámbito público no socaven la institucionalidad de un poder del Estado encargado de garantizar la correcta administración de justicia; una medida distinta no resultaría eficaz para dichos fines.
 - c) Análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.
 - La imposición de la sanción de destitución al investigado Edgard Jesús Chuiquillanqui Huaranga causaría afectación a sus posibilidades de acceso a la función pública, derecho constitucionalmente reconocido a todo ciudadano con independencia de la institución en la que lo ejerza; mientras que, de otro lado, la finalidad o interés de protección del sistema de justicia se vería afectada seriamente si no se dicta la medida propuesta, por la pérdida de confianza y credibilidad de la institución garante de un sistema judicial justo e imparcial.



Junta Nacional de Justicia

- Por otro lado, frente a dicha imposición de la sanción, teniendo en cuenta la gravedad de las faltas imputadas y que su actuación la realizó con absoluta conciencia de que sus actos vulneraban los deberes impuestos a su función, resulta razonable concluir que existe un riesgo real de que el citado investigado, en caso ejerza función jurisdiccional, cometa nuevamente los hechos que son objeto de sanción. Dicho riesgo debe ser evitado por la JNJ y la única manera de satisfacer la necesidad de proteger cabalmente al sistema de justicia es aplicando la sanción de destitución propuesta.
 - Finalmente, se tiene que la destitución incide de modo directo en la esfera jurídica del investigado al restringírsele el acceso a la función pública a la que tiene derecho todo ciudadano, mientras que la necesidad de proteger al sistema de justicia, procurando evitar el riesgo de repetición de situaciones semejantes, resulta de suma importancia, justificando su mayor protección frente al citado derecho, en tanto que los hechos imputados versan sobre el incumplimiento de deberes que sostienen y dan contenido a la función judicial como lo es el del respeto al debido proceso, más aún en su expresión de la motivación de resoluciones judiciales; es decir, el respeto a los valores básicos del sistema de justicia, los cuales pueden verse mellados en mayor medida a la ya acontecida, si se encontrara en la posibilidad mediata de acceder a una determinada función dentro de la estructura estatal.
 - Conforme a lo expuesto, resulta razonable, proporcional y satisfactorio a los fines del procedimiento disciplinario, imponer la sanción de destitución, con el fin de evitar que el investigado u otros jueces o juezas repitan hechos como los que han sido objeto de investigación, lo que demanda mayor necesidad de tutela y/o protección, frente a la posibilidad o alternativa de aplicar una sanción de menor intensidad, que no sería acorde con la conducta evaluada, constituyendo esto último un riesgo para la administración de justicia, así como para la protección de la credibilidad, confiabilidad, eficiencia, reputación y honorabilidad del Poder Judicial.
- 81.** Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión que la sanción de destitución es idónea, necesaria y proporcional.
- 82.** En definitiva, habiéndose detallado los hechos materia de imputación y valorado las pruebas del presente procedimiento disciplinario abreviado, quedan debidamente acreditados la comisión del hecho y la responsabilidad del magistrado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por lo que en virtud de los fundamentos expuestos se encuentra justificada la imposición de la medida disciplinaria de destitución propuesta por el Presidente del Poder Judicial, lo que debe redundar en beneficio



Junta Nacional de Justicia

de la sociedad en la medida que aquella espera contar con jueces cuyo accionar se sustente en el cumplimiento de la Constitución y las normas vigentes.

Por los fundamentos expuestos, apreciando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia, en uso de las facultades previstas por los artículos 150 y 154 inciso 3 de la Constitución Política; los artículos 2 literal f) y 41 literal b) de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, Ley N.º 30916; artículos 64, 65 literal a) y 67 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, aprobado por Resolución N.º 008-2020-JNJ, modificado por Resolución N.º 048-2020-JNJ; y estando al acuerdo de fecha 30 de marzo de 2022, adoptado por unanimidad por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, sin la asistencia del señor Guillermo Santiago Thornberry Villarán, en su calidad de miembro instructor, y sin la presencia de la señora Imelda Tumialán Pinto por tener abstención con respecto al investigado.

SE RESUELVE:

Artículo primero. Declarar **IMPROCEDENTE** la caducidad formulada por el investigado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga sobre la medida cautelar de suspensión preventiva del cargo dictada en su contra por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo segundo. Declarar que **CARECE DE OBJETO** emitir pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación del informe final de instrucción, por haberse dado cuenta de la actuación solicitada por el juez investigado, conforme a los términos de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo tercero. Declarar **IMPROCEDENTE** la excepción de improcedencia de acción, con relación al cargo b), deducida por el investigado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo cuarto. Tener por **CONCLUIDO** el presente procedimiento disciplinario abreviado, aceptar el pedido de destitución formulado por el Presidente del Poder Judicial y, en consecuencia, **imponer la sanción disciplinaria de DESTITUCIÓN** al abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, por su actuación como Juez del Primer Juzgado Penal Liquidador de Satipo de la Corte Superior Justicia de Junín, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo quinto. Disponer la **INSCRIPCIÓN** de la sanción a que se contrae el artículo precedente, en el registro personal del sancionado, cursándose oficio a la señora Fiscal de la Nación y a la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y publíquese la resolución correspondiente.



Junta Nacional de Justicia

Artículo sexto. Disponer la **CANCELACIÓN** del título de juez del abogado Edgard Jesús Chuquillanqui Huaranga, una vez que la presente resolución quede firme.

Artículo séptimo. Disponer la **INSCRIPCIÓN** de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, una vez que la misma quede consentida y/o firme.

Regístrese y comuníquese.



Firma Digital

Firmado digitalmente por AVILA
HERRERA Henry Jose FAU
20194484365 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2022 09:13:03 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por DE LA
HAZA BARRANTES Antonio
Humberto FAU 20194484365 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2022 09:25:40 -05:00

HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA

ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES



Firma Digital

Firmado digitalmente por VASQUEZ
RIOS Aldo Alejandro FAU
20194484365 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2022 10:38:29 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por TELLO DE
NECCO Luz Ines FAU 20194484365
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2022 10:51:43 -05:00

ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS

LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO



Firma Digital

Firmado digitalmente por ZAVALA
VALLADARES Maria Amabilia FAU
20194484365 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2022 11:17:59 -05:00

MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES